

Introducción a la edición de 2008.	2
1. El capitalismo, un sistema en crisis	4
2. El movimiento sindical y la ofensiva de la burguesía	7
2.1 La estrategia de la burguesía: competitividad y reducción de costes laborales	
2.2 El chantaje ideológico de la productividad	
2.3 Las deslocalizaciones	
2.4 El mito de la I+D+i	
2.5 Subcontratación y precariedad	
2.6 Siniestralidad laboral	
2.7 Los ataques al salario social: la crisis del Estado del Bienestar	
3. El ascenso de la lucha de clases en el Estado español	16
3.1 La huelga general del 20-J: el principio del fin del gobierno del PP	
3.2 Las jornadas de marzo y la victoria del PSOE	
3.3 La política del gobierno Zapatero	
3.4 Medidas económicas favorables a los empresarios	
3.5 La lucha de los astilleros	
3.6 La negociación colectiva	
3.7 La nueva contrarreforma laboral	
3.8 Nuevas amenazas: el sector del automóvil	
3.9 Por una reforma agraria integral	
3.10 La Administración pública, banco de pruebas de la precarización y la congelación salarial	
3.11 La mujer y la juventud trabajadoras	
3.12 ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!	
4. Por un sindicalismo combativo, de clase y democrático	31
4.1 El sector crítico de CCOO	
4.2 El marxismo y la lucha por reformas	
4.3 Sindicalismo y política	
4.4 La fuerza de la clase obrera hoy	
4.5 El trabajo de los marxistas en los sindicatos de masas	
4.6 Nuestro modelo sindical	
4.7 Socialismo o barbarie	
5. Un programa de clase	42
5.1 En defensa del empleo estable y del poder adquisitivo de los salarios	
5.2. Paremos la matanza de trabajadores por falta de seguridad	
5.3 No a la precariedad y a la subcontratación	
5.4 Alternativa para el movimiento jornalero	
5.5 Por unas condiciones de vida dignas	
5.6 Por una economía socialista al servicio de las necesidades sociales	

Textos marxistas sobre el movimiento obrero	44
--	-----------



introducción a la edición de 2008

PROCEDEMOS A REEDITAR UN DOCUMENTO QUE VIO LA LUZ HACE TRES AÑOS y que recogió las conclusiones de la I Conferencia Sindical de EL MILITANTE, celebrada en noviembre de 2005. Ese documento, agotado desde hace un tiempo, tuvo una excelente acogida entre los sectores de vanguardia de los trabajadores y permitió a la Corriente Marxista hacer progresos importantes en nuestra implantación en el movimiento obrero. El trabajo de estos años quedó reflejado en la extraordinaria asistencia de cerca de 170 delegados sindicales y trabajadores de un gran número de ramas de la producción a nuestra II Conferencia Sindical, celebrada a finales de 2007.

En los tres años transcurridos desde la primera edición de este documento se han producido muchos acontecimientos que afectan a la clase trabajadora de todo el mundo pero, sin duda, el más significativo es la profunda crisis de sobreproducción que atraviesa en estos momentos la economía capitalista, cuya espoleta fue el colapso de las hipotecas basura estadounidenses en agosto del año pasado y el consiguiente caos del sistema financiero. Por eso inicialmente pensamos en redactar un nuevo texto. Pero una relectura del mismo nos hizo cambiar de opinión, por varios motivos.

El primero, que muchos de los acontecimientos acaecidos en este periodo tienen el mismo trasfondo que otros analizados en el documento. Aunque en el documento no pudiéramos hablar del rechazo irlandés al tratado de Lisboa en junio de este año, por razones obvias, sí analizamos el no francés a la constitución europea, que responde a las mismas causas de fondo.

El segundo, que muchos de los acontecimientos ocurridos en este último trienio están ya recogidos en perspectiva en este documento. Como se podrá comprobar, a los marxistas no nos ha cogido por sorpresa la precipitación de la economía mundial hacia la recesión ni la fragilidad del llamado “milagro económico español”. Ni que la crisis de la construcción haya afectado rápidamente a la economía

real: desde el consumo a la industria, toda la actividad económica ha sufrido un intenso parón. Tal como señalamos en el documento, si en el periodo de crecimiento los capitalistas insistían en la moderación salarial y la desregulación laboral, ahora en esta fase de crisis buscan que los trabajadores y sus familias seamos los que paguemos sus consecuencias. El aumento explosivo del paro, con más de medido millón en el último año y los anuncios, a principios de este mes, de miles de despidos en la Ford de Valencia, la Opel de Zaragoza, la Citroën de Vigo, la Renault de Valladolid y la Seat de Barcelona, que se suman a la reducción de plantilla en la industria auxiliar de componentes, revelan que la crisis va a afectar de lleno al movimiento obrero y tendrá consecuencias muy serias en la lucha de clases.

Y el último motivo es que la realidad está confirmando los análisis que hacíamos hace tres años. Las grandes huelgas del metal en Vigo, en 2006 y 2007, por citar dos de las más emblemáticas de este periodo, ratifican nuestras opiniones sobre la juventud obrera y su futuro papel, y sobre que la precariedad no es un obstáculo absoluto para la lucha. Lo mismo se puede decir respecto a la conciencia y el papel de la clase obrera, como se vio cuando una parte importante de la plantilla de Delphi de Puerto Real asumió, durante la lucha contra el cierre, la consigna de nacionalización de la factoría.

Pero si en algo se han visto confirmados nuestros análisis es en la profundidad de la degeneración ideológica de amplios sectores de las direcciones sindicales. Desde la huelga general del 20 de junio de 2002 contra el *decretazo* del gobierno del PP, los dirigentes sindicales han estado desaparecidos (y no precisamente en combate). Su actuación revela que han sido deslumbrados por una década de crecimiento económico de la que sólo han visto los “brillos”. Toda su política “realista” de pactos y consensos ha ido cediendo, palmo a palmo, con-



quistas históricas del movimiento obrero. Su modelo de acción sindical se ha reducido al “diálogo” permanente con los empresarios, hasta acabar convencidos de que lo que es bueno para los capitalistas también lo es bueno para los trabajadores. Esta lógica siempre acaba igual: convirtiendo a los sindicalistas que la asumen en colaboradores de los empresarios, en lugartenientes del capital en el seno del movimiento obrero. Lo ocurrido este mismo año durante la huelga de los trabajadores de Justicia, cuando los secretarios generales de las federaciones estatales de administración pública de CCOO y UGT firmaron el convenio al margen de los trabajadores y de sus legítimos representantes en la mesa negociadora, ejemplifica perfectamente cómo piensa y actúa la burocracia sindical. En este sentido, el “milagro económico español”, con su saldo de beneficios empresariales exorbitantes por un lado y, en el otro, de recortes salariales, precariedad laboral e intensificación de la explotación, no habría sido posible sin la activa colaboración política de los dirigentes sindicales, convertidos en magníficos gestores de la economía de mercado. Pero esta situación tiene sus límites. Si durante la última década de gran crecimiento de la economía y de los beneficios empresariales la situación de los trabajadores ha empeorado, ¿qué exigirá la burguesía en un contexto de crisis como el actual?

José María Fidalgo y Cándido Méndez ya se han mostrado conformes, dada la situación económica, con los criterios de austeridad en los Presupuestos Generales del Estado de 2009. Y esa austeridad ya sabemos quién la va a sufrir. Lo revelan las palabras de Solbes cuando dice que “si la recesión sirve para limpiar la economía y remontar la situación, no tiene la mayor importancia”. Pero sobre todo lo revelan los hechos: solamente tres días después de que en la fiesta minera de UGT Zapatero dijese “que no me pidan dinero para salvar empresas de aquellos que han tenido grandes beneficios a través de procesos que en muchas ocasiones no han sido adecuados para la economía”, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 10 de septiembre anunció un fondo, ampliable, de 3.000 millones de euros (medio billón de las antiguas pesetas) para ayudar a las grandes constructoras.

En este contexto, los marxistas no confundimos a las cúpulas sindicales con la clase obrera. Después de una década en que las condiciones de vida y trabajo han empeorado, los trabajadores no van a aceptar más sacrificios sin lucha. Hay un gran resentimiento acumulado, que inevitablemente acabará por expresarse en una escalada de movilizaciones obreras, por más que la burocracia quiera frenarlas y por más que las empresas lo tengan hoy más fácil que en el pasado para ajustar sus plantillas (no renovación de contratos eventuales, eliminación de subcontratas, etc.). Serán luchas duras, radicalizadas, en muchos casos de duración prolongada, con gran participación de las plantillas, incluso con ocupación del lugar de trabajo. Huelgas como las del metal de Vigo, la limpieza del metro de Madrid o la de los autobuses urbanos de Barcelona... Huelgas que desbordarán a los dirigentes sindicales que, anquilosados en una política de desmovilización y colaboración con los empresarios, quedarán superados por una nueva generación de trabajadores, una generación de cientos de miles de jóvenes curtidos por la explotación más despiadada y que no van a aceptar sin más las recetas que nos tiene preparada la patronal. Esto también acabará por tener efectos dentro de los sindicatos, bariendo toda la basura acumulada dentro y abriendo el camino a una nueva generación de luchadores sindicales fieles a los sentimientos y las reivindicaciones de sus compañeros.

Pero esa nueva generación de luchadores sindicales necesita un programa y unos métodos que sirvan para hacer frente a las presiones ideológicas y materiales de los empresarios y del propio sistema capitalista. Todo sindicalista cuando ejerce su función de representar a sus compañeros ante la patronal, recibe fuertes presiones de la empresa. La única manera de evitar que esas presiones hagan mella en su conciencia y le lleven a “comprender” a la patronal, a aceptar su punto de vista, es que tenga su propia visión de la sociedad, una visión de clase. Y esta visión de clase sólo la puede proporcionar el marxismo, la filosofía de los trabajadores. La mejor manera de contribuir a recuperar los sindicatos como una herramienta útil para los trabajadores, es construyendo una fuerte corriente marxista dentro de los mismos, entendiendo que la lucha sindical no es un fin en si mismo sino una parte más en el combate por acabar con este sistema de pesadilla, el capitalismo, y por la transformación socialista de la sociedad. Sólo con un contenido revolucionario el sindicalismo puede evitar su degeneración en sindicalismo amarillista, de colaboración con la patronal.

**Trabajador, trabajadora ¡únete a la lucha por un sindicalismo combativo, de clase y democrático!
¡Organízate con la Corriente Marxista
para luchar por el socialismo!**

Septiembre de 2008

introducción a la edición de 2005

EL MOVIMIENTO SINDICAL NO ES UN MUNDO APARTE Y ENCERRADO EN SÍ MISMO. Las crisis económicas, sociales y políticas están poniendo a prueba la utilidad de los sindicatos para defender de manera consecuente los intereses de los trabajadores. Los sindicatos —la forma más elemental de organización obrera— están obligados a dar respuesta a los problemas, unos nuevos y otros viejos, que se van acumulando a medida que la crisis orgánica y estructural del capitalismo se agudiza.

Para los marxistas, es una obligación explicar a los trabajadores la situación y luchar para transformar la actual realidad de los sindicatos. Para lograr este objetivo, además de criticar la política de los dirigentes sindicales reformistas, es necesario ofrecer una alternativa sindical combativa, de clase y democrática que mantenga con firmeza una perspectiva socialista y que logre ganarse el apoyo consciente de los sectores más avanzados de nuestra clase.

Este documento analiza desde un punto de vista marxista la actual situación del movimiento sindical en el Estado español —sobre todo la de CCOO y UGT, que agrupan a la mayoría de los trabajadores sindicados—, expone el modelo sindical que los trabajadores necesitamos y defiende que los sindicatos se conviertan en herramientas de la lucha por el socialismo, recogiendo las conclusiones de la Conferencia Sindical de EL MILITANTE celebrada el 5 y 6 de noviembre de 2005.

1. El capitalismo, un sistema en crisis

Como afirmó Marx hace más de 150 años, la vitalidad de un modo de producción depende de su capacidad para desarrollar las fuerzas productivas. En estos momentos, el capitalismo muestra con claridad que está en decadencia. El progreso de la sociedad choca cada vez más con la propiedad privada de los medios de producción y la existencia de los estados nacionales. La profunda crisis del capitalismo mundial se manifiesta en forma de una inestabilidad creciente: económica, política, social, militar...

En contra de lo soñado en el siglo XIX por los fundadores de la economía política burguesa, el sistema es incapaz de autorregularse. El caos rige la producción capitalista. Podemos decir que el motor del capitalismo (la obtención del máximo beneficio) está comenzando a “griparse”. La concentración del capital, es decir, la acumulación de la riqueza en cada vez menos manos, está llevando al capitalismo, y con él a toda la humanidad, a un escenario de barbarie creciente. Paradójicamente, cuando más riqueza existe y cuando la ciencia y la técnica serían capaces, aplicadas racionalmente, de garantizar una vida digna a todos los habitantes del planeta, la pobreza y la miseria se extienden como una plaga incontrolable. En los albores del tercer milenio, más de un tercio de la población mundial subsiste con menos de dos euros diarios, el desempleo y el subempleo afectan a dos mil millones de personas, y países enteros, incluso continentes enteros como el africano, retroceden brutal-

mente en todos los terrenos o se hunden directamente en la barbarie. El obstáculo que impide que esos medios técnicos se pongan al servicio de la humanidad es el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción. Es una condena rotunda de este sistema que se cierren fábricas y se supriman miles de empleos solamente para que la tasa de beneficios empresariales no descienda.

Esta degradación social también afecta a los países desarrollados. El último ejemplo lo tenemos en la revuelta en los barrios franceses. Unas semanas antes, el paso del huracán *Katrina* por EEUU puso de manifiesto las abismales diferencias sociales existentes en el país más rico del mundo y el carácter criminal del capitalismo. Los recortes del gasto social propiciados por Bush para financiar la guerra de Iraq crearon las condiciones objetivas para que el *Katrina* provocase tamaño desastre.

Hay otro fenómeno no menos importante. Cuando escribió *El imperialismo, fase superior del capitalismo* en 1916, Lenin insistía en que la fase del desarrollo capitalista en su forma monopolista confirmaba el dominio absoluto del capital financiero sobre toda la economía. Si entre 1960 y 1980 el sector financiero estadounidense generaba aproximadamente el 15% de los beneficios empresariales, en 2003 generó el 45%, y el porcentaje sigue creciendo. En realidad, las empresas productivas obtienen sus mayores beneficios porque actúan como bancos: en 1980, la Gene-



Campaña contra la Constitución Europea en Francia

ral Electric obtenía el 92% de sus beneficios de la manufactura; en 2003, su división de crédito le proporcionó el 56% de ellos.

Por otra parte, las reservas sociales del capitalismo estadounidense, generadas por el elevado nivel de vida de los trabajadores en el pasado, están siendo destruidas. El crecimiento económico de las dos últimas décadas se ha basado en un incremento constante de la desigualdad social. Según un reciente informe del gobierno, 37 millones de estadounidenses viven en la pobreza, el 12,7% de la población. Los ciudadanos sin seguro médico casi alcanzan los 46 millones, y hay más de 13 millones de niños pobres. Actualmente, una familia obrera no puede vivir con un solo salario.

En Europa, la burguesía sigue tratando de superar las contradicciones internas del capitalismo mediante la extensión de un mercado único europeo que le permita competir en mejores condiciones con EEUU y Japón. Hasta ahora, el consumo interno y el endeudamiento familiar son los factores fundamentales que han permitido mantener un mediocre crecimiento económico, si bien los países más importantes están en recesión o estancados. En Alemania no hay crecimiento y el desempleo está por encima del 10% y ya supera los cinco millones de parados, un dato demoledor para la primera potencia económica europea. En Francia ocurre prácticamente lo mismo. En la zona euro, los salarios reales (los salarios descontada la inflación) siguen cayendo.

El argumento habitual de los economistas burgueses para explicar la falta de crecimiento en la UE es la existencia de un sector público demasiado grande que consume gran cantidad de recursos, por lo que

se requiere avanzar hacia el modelo anglosajón de Bush y Blair. Además, el euro significa que las burguesías europeas más débiles (como la española) ya no pueden ganar competitividad devaluando su moneda, una receta tradicional. Por tanto, la opción que les resta es rebajar los costes laborales. Esto no solamente significa moderación salarial, sino también retrocesos laborales (incremento de jornada y de ritmos, abaratar y facilitar el despido, más movilidad geográfica y funcional, menos protección a los parados, retraso de la edad de jubilación) y retrocesos sociales (enseñanza de peor calidad, menos gasto en sanidad y vivienda públicas, reformas fiscales regresivas, aumento de los impuestos indirectos, recorte de las pensiones, etc.), es decir, un auténtico trasvase de dinero de los bolsillos de los trabajadores a los de los ricos. La burguesía europea no se va a contentar con pequeñas concesiones. Quiere un retroceso en toda regla, quiere acabar con el Estado del Bienestar, con el fin de preservar la tasa de ganancia empresarial.

La clase obrera lleva perdiendo derechos y conquistas desde hace décadas. El proceso se agudizó tras la caída del Muro de Berlín en 1989, que dio paso a una ofensiva brutal del capitalismo, que desde entonces se entrega a una borrachera de ataques salvajes. Pero estos ataques, en medio de una orgía de beneficios empresariales exorbitantes, tienen también otra cara: un auge en la lucha de clases desconocido en los últimos treinta años. Se pensaban que habían entrado en el paraíso del capital, que podían aumentar sus riquezas a costa de los trabajadores eterna e impunemente, pero se olvidaron de un "pequeño" detalle que los marxistas sí tenemos muy presente: **la explotación de los trabajadores siempre tie-**

ne un límite. Ahora, en la forma de una poderosa reacción de los trabajadores contra sus desmanes, van a sufrir la resaca de su borrachera.

LA CLASE OBRERA PONE SU SELLO EN LOS ACONTECIMIENTOS

Hemos asistido a la derrota de la Constitución europea en los referendos de Francia y Holanda, y a huelgas generales contra las políticas antiobreras en muchos países (Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Grecia...). También la derrota electoral del PP el 14 de marzo de 2004 y los dos años previos de movilizaciones masivas demostraron la voluntad de millones de trabajadores y jóvenes de luchar contra la ofensiva de los capitalistas.

Todos estos acontecimientos forman parte de un proceso global que ha sacudido la conciencia de millones de personas en todo el mundo y que tuvo su expresión más aguda en la movilización mundial contra la guerra imperialista de Iraq. Desde entonces, la clase obrera ha puesto el sello en todos los acontecimientos decisivos de la sociedad.

La resistencia de los trabajadores a perder más derechos está teniendo consecuencias políticas. En este contexto de crisis del sistema, la socialdemocracia europea ya no es capaz de ofrecer mejoras a su base social, la clase obrera. Al contrario, lo que hoy ofrece no son reformas, sino contrarreformas, lo que está abriendo crisis en los partidos socialdemócratas. El ejemplo más visible lo tenemos en el SPD alemán, que ha sufrido recientemente una escisión por la izquierda, el WASG (Alianza por el Trabajo y la Justicia Social). En las elecciones alemanas de septiembre, el Partido de la Izquierda (fusión del WASG con el PDS) obtuvo 4.200.000 votos, más del 8%. También la situación dentro del Partido Laborista británico, con una oposición creciente a Blair, tiende a mayores diferenciaciones internas y se está traduciendo en el avance de las posiciones de izquierda dentro de numerosos sindicatos. En Francia, el triunfo del "no" en el referéndum provocó la dimisión de Raffarin como primer ministro, divisiones en el seno del PSF y, sobre todo, el recrudecimiento de la lucha de clases. Incluso en Portugal, donde en las últimas elecciones la suma de votos de la izquierda fue mayor que nunca, los trabajadores se están movilizándose contra los recortes del gobierno socialdemócrata de José Sócrates.



Manifestación en Venezuela en apoyo al proceso revolucionario

Al otro lado del océano, en América Latina, desde hace unos años se vienen desarrollando procesos revolucionarios. Con una deuda externa impagable, el saqueo indiscriminado de sus riquezas por los monopolios imperialistas, la depauperación de las masas y la ausencia de colchones sociales como los creados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, su situación cada vez más convulsa refleja el callejón sin salida del capitalismo y la necesidad objetiva de avanzar hacia otra sociedad.

Según datos del Banco Internacional para el Desarrollo, el 10% de los ciudadanos latinoamericanos más ricos tienen unos ingresos 84 veces superiores al 20% más pobre, el 85% de los niños viven en la pobreza y la desnutrición infantil es del 33%. En América Central, entre 1992 y 2002 el porcentaje de gente hambrienta aumentó un 33%, pasando de cinco millones a 6,4. En Argentina, que produce carne y trigo suficientes para alimentar a 350 millones de personas, casi ocho millones de ciudadanos (más del 20% de la población) son indigentes y están desnutridos. En Brasil el cuadro no es diferente: 5.000 familias poseen un patrimonio equivalente al 42% del PIB, lo que convierte a este país en uno de los campeones de la desigualdad social.

La situación de Lula y, sobre todo, la revolución bolivariana en Venezuela demuestran, una vez más, que no se puede servir a dos amos a la vez: o se está con los capitalistas o se está con los trabajadores. No hay terceras vías, como ha reconocido Hugo Chávez. El desarrollo social y económico solamente estará garantizado con el socialismo.

2. El movimiento sindical y la ofensiva de la burguesía

Durante las dos últimas décadas, especialmente tras el colapso del estalinismo, hemos asistido a una ofensiva furiosa de la burguesía para liquidar conquistas históricas de la clase obrera en los países capitalistas desarrollados. Esta auténtica contrarrevolución laboral vino acompañada de un ataque ideológico contra todo lo que oliese a socialismo o marxismo, desplegado desde las tribunas académicas, mediáticas y propagandísticas de la clase dominante. Una campaña de tanto calado no podía dejar de tener un efecto profundo en las direcciones reformistas de las organizaciones de izquierdas y, por supuesto, en los sindicatos, cada vez más alejados de una orientación revolucionaria en su acción cotidiana. Cuando desde algunos círculos “teóricos” de la izquierda se insiste en que esta situación implica cambios estructurales en la clase obrera, la transformación del concepto de la lucha de clases y otras cosas por el estilo, en realidad tales “teóricos” demuestran no entender lo que ocurre. El capital, en su búsqueda de ganancias, siempre tiende a ampliar la cuota de explotación de la fuerza de trabajo. Esto le lleva, en todas las épocas, a adoptar, en función de la correlación de fuerzas entre las clases, todo tipo de mecanismos para obtener más plusvalía de los trabajadores.

El problema es que la ofensiva actual ha contado, en la mayoría de los casos, con el beneplácito (o, cuando menos, la pasividad) de quienes tenían que haberle hecho frente: las direcciones sindicales y los dirigentes de la izquierda, que aceptan que el capitalismo es el único sistema posible. No está en crisis el modelo de sindicato de clase de masas; lo que está realmente en crisis es la política reformista y pactista de los dirigentes de los sindicatos y los partidos de izquierda, que en muchos casos han aplicado las medidas más agresivas de la burguesía.

Muchos habían puesto el RIP sobre la clase obrera y sacado la conclusión de que no sería el sujeto revolucionario, la protagonista de la transformación social. Esto tampoco es nada nuevo, pues las épocas de derrota política de los trabajadores generan un revisionismo teórico entre los dirigentes de la izquierda más afectados por las presiones ideológicas de la burguesía. Pero más allá de clichés manoseados, lo cierto es que, debido a los mecanismos del propio capitalismo (precariedad, simplificación de tareas productivas, aumento de ritmos y jornada, reducción de los salarios...), crece la polarización social, aumenta

la proletarización de la sociedad y la clase obrera vuelve a ser protagonista.

Es necesario insistir en que la contradicción central del capitalismo se establece entre el trabajo asalariado y el capital, y que es imposible conciliar sus respectivos intereses. **Por su papel en la producción, la clase obrera es objetivamente la única clase revolucionaria, la única interesada en la desaparición de la sociedad de clases.** Obviamente esta aspiración sólo podrá ser satisfecha mediante la expropiación del capital y el establecimiento de una auténtica democracia obrera, lo que exige la nacionalización de la banca, los monopolios y la tierra, el control estatal del comercio exterior y la planificación de la economía bajo control de los trabajadores.

Por tanto, el trabajo sistemático de los marxistas en los sindicatos, defendiendo una política de clase basada en la movilización independiente de los trabajadores, es fundamental para la lucha por el socialismo. Sólo con la elevación del nivel de conciencia de los trabajadores, organizados y no organizados, a través de su propia experiencia en la acción, es posible infundir al conjunto de la clase la confianza necesaria en sus propias fuerzas y, al mismo tiempo, combatir la política pactista y desmovilizadora de los dirigentes sindicales reformistas.

Los ocho años de gobiernos del PP demostraron sobradamente la alergia a la lucha de los aparatos sindicales, cuyos dirigentes siguen convencidos de que los pactos y el consenso son la mejor acción sindical. A pesar de ello, CCOO y UGT seguirán siendo la clave del movimiento sindical, como ponen de manifiesto la huelga general del 20 de junio de 2002 y los conflictos que todos los días libran miles de trabajadores para mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Entre ambos, suman 1.770.000 afiliados y 200.000 delegados sindicales.

Es verdad que la vida interna de los sindicatos de masas se ha reducido considerablemente y que las actitudes antidemocráticas, el ambiente burocrático y la estrechez política que conlleva una acción sindical alejada de las asambleas y de la lucha no favorecen en nada la participación de las bases y son los factores que explican la no intervención de nuevas capas de la clase en ellos.

Por otra parte, los grandes sindicatos han contraído una enorme dependencia del Estado, especialmente en lo referido a su financiación, ya sea por subvencio-

nes directas o por las indirectas (dinero de la formación, liberados sin justificación legal, etc.). Esta dependencia económica es una irresponsabilidad porque le da a los gobiernos un arma para condicionar la acción sindical, y no es ajena al giro a la derecha que hemos visto en las cúpulas de ambos sindicatos, giro que se hizo más patente en CCOO, entre otras cosas por su tradición ideológica, y que alcanza niveles que no dejan de sorprender: firma continuada de pactos sociales, aceptación de planes de reconversión asumiendo los argumentos patronales en lo referido a productividad y competitividad, asunción de su papel como “agentes sociales” que regulan el conflicto en vez de estar al servicio de la lucha obrera... Existe un divorcio creciente entre lo que se cuece en los despachos sindicales y el sentimiento de millones de trabajadores que desean evitar el continuo retroceso de sus condiciones de vida y trabajo.

Sin embargo, este fenómeno no es nuevo. En la historia del movimiento obrero existen amplios períodos donde los sindicatos están dominados por la rutina y la colaboración con la patronal. Pero, como organizaciones de masas que son, los sindicatos necesariamente acaban por reflejar, incluso antes que los partidos obreros, los cambios en la situación objetiva y en la conciencia de los trabajadores. Los procesos de giro a la izquierda y radicalización de los sindicatos, presenciados en numerosas ocasiones en la historia del movimiento obrero, son producto de la presión de la lucha de clases: los crecientes ataques de la burguesía acaban por hacer imposible que las cúpulas sindicales sigan con su acción sindical pactista. Estos giros a la izquierda son absolutamente inevitables y exigen que los sindicalistas más avanzados no sólo no abandonen las posiciones en los sindicatos de masas, sino que luchen por fortalecer y consolidar su influencia incluso cuando están en franca minoría y son perseguidos con saña por los burócratas.

En el último período estamos asistiendo a cambios, aunque las consecuencias de éstos todavía no sean perceptibles. En las grandes empresas, de las que se nutre habitualmente la burocracia sindical, las cosas están cambiando. Los procesos de destrucción de empleo fijo y de subcontratación también acarrearán movimientos en las estructuras sindicales: unos siguen aferrados a sus cargos en los comités de empresa, pero otros se van por jubilación, por preferir la comodidad de un despacho en el sindicato o por percibir que las cosas están empeorando, que la empresa es una selva por culpa de la subcontratación y que ser sindicalista obliga a un mayor compromiso porque los problemas ya no se “resuelven” charlando amigablemente con la dirección. ¡Y tienen razón!

Por otra parte, el rejuvenecimiento de las plantillas aporta la savia de la juventud obrera. En muchas empresas, los jóvenes son utilizados como arietes para incrementar la productividad y extender la jornada. Muchos han aceptado dobles escalas salariales y peores condiciones de trabajo, sobre todo cuando no existía otra alternativa. Muchos están endeudados hasta las cejas y necesitan el dinero para llegar a fin de mes y pagar las facturas del piso, el coche y los gastos domésticos. Pero la juventud obrera también está realizando su propia experiencia, y no aceptará los sacrificios eternamente.

En el próximo período, los retrocesos en las condiciones laborales acabarán inevitablemente por provocar un aumento de la conflictividad, lo que requerirá delegados combativos. Los jóvenes trabajadores jugarán un papel decisivo y se situarán en la vanguardia de los sectores más dinámicos y avanzados de la clase y los sindicatos.

También asistiremos a nuevas crisis y transformaciones en el movimiento sindical, en CCOO y también en UGT, transformaciones íntimamente relacionadas con la crisis del capitalismo y el ascenso de la lucha de clases. Por eso es todavía más necesario construir una fuerte corriente marxista dentro de los sindicatos, que dispute a las actuales direcciones el derecho a dirigir la acción sindical.

2.1 LA ESTRATEGIA DE LA BURGUESÍA: COMPETITIVIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTES LABORALES

Tras el colapso de la URSS, los ideólogos del capital auguraron un futuro de prosperidad y paz en el marco de un nuevo orden mundial capitalista de crecimiento económico ininterrumpido y sin ciclos económicos de boom y recesión.

Esta falacia pronto se dio de bruces con la cruda realidad de miles de millones de seres humanos. Ni se detuvieron las crisis, ni desapareció la lucha de clases ni se detuvo tampoco el proceso de toma de conciencia de millones de trabajadores.

El modo de producción capitalista es un sistema anárquico, incapaz de utilizar toda la capacidad productiva instalada, que permitiría proporcionar una vida digna a toda la humanidad. Evidentemente, los capitalistas producen bienes o servicios para venderlos, pero, como diría Perogrullo, esto solamente puede ocurrir si los supuestos compradores disponen del suficiente poder adquisitivo, ya sea directamente o endeudándose a través del crédito. El fundamento interno de la producción capitalista está determinado por la obtención del máximo beneficio; sin él no hay

inversión ni producción, aunque las necesidades sociales sean gigantescas. Cuando el mercado mundial está sujeto a una dura competencia entre las empresas, como ocurre actualmente, los capitalistas recurren a toda una serie de medidas para garantizar la mayor tasa de ganancias posible:

a) Bajar los precios de las mercancías, lo que requiere abaratar los costes de producción mediante la renovación de la tecnología y/o maquinaria, mediante cambios en la comercialización y la organización del trabajo (por ejemplo, *toyotismo* frente a *fordismo*¹), o bien mediante una mayor explotación de los trabajadores (pérdida de poder adquisitivo de los salarios, incremento de jornada y ritmos, precarización del empleo, subcontratación, falsos autónomos, deslocalización, aumento de los impuestos indirectos, recortes en pensiones, desempleo, sanidad y enseñanza públicas, etc.).

b) Dejar de invertir en la empresa o invertir menos, dadas las dudas sobre los futuros beneficios.

c) Deslocalizar la empresa, trasladando producción a países que garanticen el beneficio deseado, por las peores condiciones laborales.

d) Diversificar la inversión hacia otras ramas o sectores de producción (ofertas de ocio o servicios, construcción, etc.).

e) Cerrar directamente la empresa e invertir la plusvalía acumulada en sectores parasitarios (acciones bursátiles, inmobiliarias, etc.), para vivir de rentas.

El proceso de concentración del capital y la globalización capitalista han supuesto una mayor sincroni-

zación de la crisis latente de sobreproducción, sin que funcionen ahora los viejos mecanismos de relevo de una “locomotora” económica por otra. En estos momentos, la economía mundial depende de EEUU, mientras que Japón y la Unión Europea se arrastran en una situación de estancamiento y recesión. La aparición de China como potencia económica, lejos de apaciguar las tensiones, las ha incrementado, al agudizar la competencia. Esta pugna por cada trozo del mercado mundial aumentará en el futuro, reflejando la profunda crisis de sobreproducción que sufre el capitalismo.

2.2 EL CHANTAJE IDEOLÓGICO DE LA PRODUCTIVIDAD

En *El manifiesto comunista*, Marx explicó que el uso de mejor maquinaria, de más tecnología y, por consiguiente, el aumento de la división del trabajo no mejoraría las condiciones materiales de los explotados: “Cuanto más se desarrolla la maquinaria y la división del trabajo, más aumenta la cantidad de trabajo, bien mediante la prolongación de jornada, bien por el aumento del trabajo exigido en un tiempo dado, la aceleración del ritmo de las máquinas, etc.”. Esto es exactamente lo que vemos en todas las industrias del mundo. Para amortizar los grandes desembolsos que supone la aplicación del desarrollo técnico al proceso productivo, los capitalistas tienen que exprimir a la clase obrera. De ahí la contradicción de que crezcan en paralelo tanto el paro como la jornada laboral de los que tienen empleo.

Para combatir la caída de la tasa de beneficios, los empresarios se ven obligados a incrementar constantemente la plusvalía relativa (aumento de ritmos) y absoluta (aumento de jornada y reducción de salarios) que obtienen del trabajador. Si los trabajadores no oponemos resistencia a este proceso, inevitable bajo el capitalismo, el resultado es el aumento de la explotación y el empeoramiento de nuestras condiciones de vida y trabajo.

Cuando los dirigentes sindicales asumen el discurso empresarial de mejora de la competitividad y la productividad, están colaborando explícitamente con la explotación capitalista; cuando a la ofensiva patronal le oponen planes de ajuste “no traumáticos” (prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, ba-



1. *Toyotismo*: Modelo empresarial caracterizado por la implicación de los dirigentes sindicales en la gestión, el *just-in-time* y la división de los trabajadores entre una masa maltratada y una minoría relativamente “privilegiada” a la que se le permite tener iniciativas a través de los círculos de calidad.

Fordismo: Modelo empresarial basado en la cadena de montaje y en el paternalismo combinado con una gran aversión al movimiento obrero organizado.

jas incentivadas) que dejan sin futuro a la juventud de comarcas enteras, están favoreciendo la estrategia de los capitalistas. De esta manera se destruye empleo, se empeoran las condiciones y los derechos de los trabajadores, y la correlación de fuerzas se hace más favorable a los empresarios, que pronto exigirán nuevos sacrificios.

La asunción del discurso capitalista por los dirigentes reformistas del movimiento obrero les hace discurrir por los mismos parajes mentales que los empresarios y la burguesía. Así, el futuro de los trabajadores ya no dependería de su grado de organización y lucha, sino de la situación económica de su empresa o de su país; por tanto, los trabajadores deben colaborar para que las empresas no pierdan la carrera de la competitividad y “vayan bien”, porque así también les irá bien a los trabajadores. Es decir, se sustituye la lucha de clases por la colaboración de clases, se sustituye la contradicción entre capital y trabajo por la competencia entre trabajadores. Cuando los dirigentes sindicales no critican desde una perspectiva de clase las guerras comerciales entre países (el último ejemplo lo tuvimos en el bloqueo de la importación de productos textiles desde China) y dan su visto bueno a estas medidas con la justificación de mantener puestos de trabajo en “su” país, están alimentando el chovinismo y subordinando el movimiento obrero a la burguesía nacional.

En el *Manifiesto comunista* podemos leer que la clase obrera no tiene patria, pero los dirigentes sindicales reformistas han abandonado la visión internacionalista de la lucha obrera, que no es más que la

concreción práctica del papel que juega la clase trabajadora en la sociedad capitalista. Haciendo el juego a la burguesía, los dirigentes sindicales no hacen nada por impedir el enfrentamiento de unos trabajadores con otros, y no solamente de distintos países, sino incluso dentro de las propias empresas: fijos frente a eventuales, los de la empresa principal frente a los de las subcontratas, los de oficinas frente a los del taller, inmigrantes frente a nativos, etc. Esta lógica contradictoria no hace más que socavar la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas, minando la necesaria unidad de la clase obrera en su lucha contra los empresarios.

2.3 LAS DESLOCALIZACIONES

La piedra de toque del funcionamiento del capitalismo contemporáneo es la existencia de un mercado mundial integrado en el que compiten los grandes monopolios, que poseen capitales mayores al de muchos estados nacionales formalmente soberanos. Según datos de la ONU, más de la mitad del comercio mundial y dos tercios de las transacciones internacionales en bienes y servicios provienen de las multinacionales. El estancamiento de la economía mundial está provocando rápidos movimientos en busca de mayor rentabilidad del capital: apertura de nuevos mercados y mayor explotación de los ya existentes, inversión en nuevas ramas de la producción que aseguren altos beneficios y abaratamiento de los costes laborales, el hilo conductor de todas las estrategias.



Manifestación de trabajadores de Samsung, Philips y Minivat en Barcelona contra la destrucción de puestos de trabajo

En este contexto hay que situar las deslocalizaciones de empresas, un fenómeno tan viejo como el propio capitalismo. Obviamente los capitalistas no pueden cerrar todas sus industrias en los países industrializados, pues estos países constituyen la base de sus mercados y sus exportaciones (más del 80% de los intercambios mundiales de bienes y servicios se realizan entre ellos), y es donde la productividad del trabajo es mayor.

Las deslocalizaciones son un chantaje gigantesco a los trabajadores occidentales, un intento de que acepten reducir sus salarios, aumentar su jornada, la flexibilidad laboral, etc. La mayoría de las empresas que amenazan con la deslocalización no están en pérdidas, al contrario, tienen beneficios, pero quieren aumentarlos todavía más. La planta de Philips en Catalunya desmantelada a principios de 2004 había obtenido en 2002 unos beneficios diez veces superiores al objetivo fijado por la dirección de la empresa, pero esa altísima rentabilidad no impidió su deslocalización.

Las deslocalizaciones no tienen nada que ver con la productividad y la competitividad. Ser más competitivo consiste en producir más con la misma fuerza de trabajo, y esto depende de múltiples factores: el nivel tecnológico, la capacidad de financiación, la cualificación de los trabajadores, las infraestructuras, las comunicaciones, el valor añadido de la producción, etc. La productividad no depende del coste de la mano de obra, de que se alargue la jornada laboral y se reduzcan los salarios. ¿O acaso la economía malaya es más productiva que la alemana?

Con lo que tienen que ver es con algo muy diferente: la rentabilidad. Si los capitalistas insisten en aumentar su tasa de beneficios a través del factor de los costes laborales es porque les conviene más. En primer lugar, porque se ahorran el gasto en inversión; y, en segundo lugar, porque las deslocalizaciones les permiten producir a costes tercermundistas para seguir vendiendo a precios occidentales. Un negocio fabuloso.

Pretender hacer frente a este problema apelando a la “responsabilidad social” de las empresas, como últimamente se está poniendo de moda entre los dirigentes sindicales reformistas, es una pérdida de tiempo. Y tampoco es alternativa el intentar “competir”, es decir, hacerle concesiones a la patronal para que no deslocalice la factoría. Después de cada concesión, el resultado son más exigencias de la patronal porque la brecha laboral es tan enorme que los recor-

tes “asumibles” no la pueden salvar. ¿Hasta dónde tendría que aceptar la degradación de sus condiciones laborales un trabajador de este país para poder competir con los salarios de 300 euros mensuales de, por ejemplo, Eslovaquia (por no hablar de los 30 euros de los países del mal llamado tercer mundo)? Desde esta óptica claudicante, la única manera de evitar las deslocalizaciones sería aceptar las condiciones laborales de los países de destino.

Esta filosofía refleja la influencia ideológica de la burguesía sobre los reformistas. Los trabajadores occidentales no podemos aceptar esa propaganda interesada que dice que la amenaza para nuestros empleos y conquistas son nuestras “privilegiadas” condiciones y que sólo podremos mantener nuestros puestos de trabajo compitiendo con los trabajadores de otros países, para lo que debemos renunciar a nuestras conquistas. De hecho, las deslocalizaciones (como el resto de las medidas antiobreras) siempre van acompañadas de una campaña de propaganda. Se manipula la información y se filtran datos interesados con el fin de convencer de la inevitabilidad de las medidas, y así encontrar menos resistencia².

La manera de evitar las deslocalizaciones no es aceptando recortes. Este camino es una esperanza vana y aboca a una espiral descendente a los infiernos. La alternativa es la defensa de unas condiciones dignas para todos a través de la lucha internacionalista contra los empresarios, empezando por los del propio país, que también deslocalizan la producción, y el cuestionamiento del poder de los capitalistas para cerrar sus empresas y dejar a los trabajadores en la calle, es decir, el cuestionamiento de la economía de libre mercado.

2.4 EL MITO DE LA I+D+i

El argumento preferido de los dirigentes sindicales reformistas a la hora de combatir las deslocalizaciones es que las empresas tienen que optar por otro modelo de competitividad y hacer un mayor esfuerzo inversor en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación). Lo han dicho hasta la sociedad Fidalgo (CCOO), Méndez (UGT) y sus homólogos del IG Metall alemán, la CGIL italiana, etc. Esta forma de presentar las cosas no se sostiene por ningún lado y sería una buena prueba de ingenuidad si no fuera porque los dirigentes sindicales saben perfectamente que esa alternativa no esconde más que humo.

2. Ver el plan de la multinacional Valeo para deslocalizar una de sus plantas y el análisis del plan de reconversión de Izar del Sector Crítico de CCOO de Ferrol en www.elmilitante.org.

En primer lugar, las empresas que deslocalizan producción en Europa o EEUU suelen ser multinacionales punteras en tecnología con una I+D+i de vanguardia. Esto no es casual. Como quedó explicado en el apartado 2.2, está causado por la propia inversión.

Pongamos algunos ejemplos. Munich, una de las zonas más afectadas por las deslocalizaciones con dirección al Este europeo, es la primera región germana en I+D+i en sectores como biotecnología y tecnologías de la información. La segunda zona afectada es Stuttgart, puntera en automoción e ingeniería mecánica. El IG Metall ha denunciado que Siemens baraja trasladar 10.000 empleos a Hungría y la República Checa. ¿Acaso las plantas alemanas de Siemens no son tecnológicamente avanzadas? Eso lo sabe hasta un niño de seis años. Pero la cuestión no radica ahí. El traslado de esos puestos de trabajo se debe a que la rentabilidad en Europa del Este o Asia es mucho mayor debido a los bajos salarios y la falta de derechos laborales.

También en Francia abundan los ejemplos de deslocalizaciones: la fundición Metaleurop, del grupo suizo Glencore, que se deshizo de su filial en la localidad de Noyelles-Godault (Calais) y dejó en la calle a 830 empleados; el grupo coreano Daewoo-Orion, que liquidó sus tres centros en el país, en la región de Metz (Lorena); o el reciente anuncio por Hewlett-Packard de la supresión de miles de empleos.

En el Estado español, la situación es similar. En muchos casos, las empresas que amenazan con la deslocalización son multinacionales que recibieron subvenciones jugosas del Gobierno o de las autonomías. En Catalunya hemos tenido numerosos ejemplos en el sector textil, químico, metal; en Euskadi, en el sector aeronáutico y el metal... Y ahora, grandes empresas de automoción, como Seat y General Motors, entonan la misma canción.

La deslocalización está provocando la destrucción de miles de empleos directos, a los que hay que añadir los destruidos por reconversiones en el sector siderúrgico, naval, etc. En todos estos conflictos, la receta de los dirigentes de CCOO y UGT es siempre la misma: negociar el expediente, proponer ofertas de viabilidad que incluyen reducciones salariales y aumento de la jornada, pérdida de derechos y, en el peor de los casos, aceptar los cierres tras obtener un incremento de las indemnizaciones. Es decir, aceptan la lógica del capital, lo que significa desarmar por completo a los trabajadores y dejar al borde del abismo a miles de familias y comarcas enteras.

Desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, existe otra alternativa a la ofrecida por los dirigentes sindicales reformistas. En primer lugar,

comprender que los beneficios empresariales son parte del salario no pagado a los trabajadores, que somos los que realmente creamos la riqueza. En segundo lugar, comprender que los puestos de trabajo son un patrimonio común de la clase obrera y que no podemos aceptar la destrucción de uno solo de ellos, y menos cuando se hace para mantener o aumentar los beneficios.

Frente a las deslocalizaciones, como frente a los expedientes de regulación de empleo, es necesaria una acción sindical a la ofensiva basada en un programa que unifique a la clase obrera y en la disposición a la movilización de los trabajadores, tantas veces demostrada (huelga general del 20-J, Síntel, Puertollano, astilleros, minería...). Los trabajadores y los sindicatos no podemos aceptar la cantinela de los empresarios. ¡Qué disminuyan ellos sus beneficios! ¡Que recorten ellos sus salarios multimillonarios! ¡No podemos aceptar más despidos!

2.5 SUBCONTRATACIÓN Y PRECARIEDAD

A finales de junio de 2005, en el Estado español había cinco millones de trabajadores con contrato temporal (un tercio del total). Este porcentaje es veinte puntos superior a la media de la Unión Europea, estimada en el 13,6%. Nuestro país suma más trabajadores temporales que Italia, Reino Unido, Bélgica y Suecia juntos. Las direcciones sindicales de CCOO y UGT, aparte de “lamentarse” de esta situación, parece que no extraen ninguna conclusión, y siguen perdiendo el tiempo en intentar convencer a los empresarios de que hagan más contratos fijos y apelando a la “recuperación” del principio de contratación indefinida, a la “revisión” de los sistemas de bonificación para esta modalidad de trabajo y a “vigilar” este tipo de contratación para que no se utilice para sustituir empleo fijo.

Lo que no dicen en absoluto es cómo se pueden poner en marcha las medidas que proponen. Limitarse exclusivamente a denunciar la situación repitiendo lo mismo desde hace años no parece la mejor fórmula. Instalados en una especie de fatalismo existencial, se “olvidan” precisamente de la función de un sindicato: organizar a los trabajadores para luchar por la defensa y mejora de las condiciones de vida y trabajo del conjunto de la clase obrera. Al contrario, parecen confiar ingenuamente en que el “diálogo social”, ahora con el PSOE en el gobierno, hará que la precariedad se vaya reduciendo. ¿Organizar y llamar a la lucha a los trabajadores precarios? Eso no se les pasa por la cabeza. Una característica de los dirigentes re-

formistas del movimiento obrero es su sistemática falta de confianza en los trabajadores.

Pero, para su desgracia, en determinadas circunstancias los trabajadores no esperan sus consejos y se ponen en marcha. Esto es lo que ocurrió tras el fatal accidente en Repsol Puertollano (agosto de 2003), donde perdieron la vida diez trabajadores de empresas subcontratadas.

Aquel accidente no sólo puso en evidencia las penosas condiciones laborales producto del fenómeno de la subcontratación masiva en las grandes empresas, sino que también reveló cómo ven a los dirigentes sindicales amplios sectores de la clase obrera. La reacción de los trabajadores subcontratados, organizando su propia comisión obrera de representantes, en la que participaron afiliados a UGT y CCOO e incluso delegados sindicales, sólo puede explicarse a consecuencia de una combinación de brutal explotación laboral y dejadez sindical durante un tiempo prolongado. Si esta situación fuese una excepción, se podría achacar a causas locales. Pero lo cierto es que no es una excepción. Los dirigentes sindicales y los comités de las grandes empresas a lo largo y ancho del país llevan años abandonando a su suerte a los trabajadores de las compañías auxiliares.

La subcontratación busca el aumento de los beneficios a costa de los trabajadores, a través de la sustitución de empleo fijo por empleo precario y la división del movimiento obrero, para así debilitarlo y favorecer la degradación de las condiciones laborales. Para que la operación salga bien, es importante neutralizar al movimiento sindical de la empresa principal. Esto se consigue políticamente. A diferencia de los trabajadores normales, un sindicalista está en frecuente contacto con los empresarios (o el gobierno), tratando temas con ellos, etc. En cada reunión es sometido a un bombardeo ideológico que busca hacer penetrar en su conciencia los puntos de vista empresariales, como que la “competitividad” y el “mercado” exigen abaratar costes “porque si no el trabajo se lo lleva la competencia o se va a otro país, y se pone en peligro la supervivencia de la empresa y de todos los puestos de trabajo”.

A resultas de este bombardeo ideológico y, sobre todo, de no tener las cosas políticamente claras, demasiados responsables sindicales han perdido la perspectiva de clase. Así, su visión de la defensa de los intereses de los trabajadores queda reducida a la defensa estrecha y miope de los supuestos intereses de “sus” trabajadores, de los trabajadores de su empresa. En alguna gran empresa, las secciones sindicales parecen gestorías de prejubilaciones. Por eso en



Manifestación en Puertollano tras la explosión de la refinería de Repsol

los recortes de plantilla se limitan a negociar las condiciones económicas de los afectados, sin considerar los efectos sociales y sindicales a largo plazo. Incluso se llega a aberraciones como la de oponerse... ¡a que los trabajadores subcontratados usen el comedor!, como en una empresa de Coruña. Todo esto es un gravísimo error que al final acaba colocando del lado de la patronal a los sindicalistas que asumen estos esquemas hasta sus últimas consecuencias.

Pero los empresarios no hacen distinciones entre trabajadores. En contra de esa idea envenenada de que “para que los fijos puedan tener unas condiciones laborales mejores, los subcontratados las tienen que tener peores”, la precariedad perjudica a todos los trabajadores porque debilita al movimiento obrero. Ayudar a mejorar la situación de otros trabajadores, además de ser un deber solidario elemental para cualquier trabajador con conciencia de clase, es también una manera de que los trabajadores de las grandes empresas defiendan a largo plazo sus intereses, que también están siendo atacados. Si el proceso continúa, si las plantillas fijas siguen reduciéndose y los precarios aumentando, si las empresas ven al movimiento obrero disgregado y débil, se facilitará el ataque contra los derechos que aún persisten. ¿Y cómo afrontar hoy por hoy una lucha decisiva contra una gran empresa sin contar con los subcontratados, que en muchos recintos ya constituyen la mayoría de los trabajadores?

La división que hoy vemos en el recinto de las grandes empresas es tremendamente negativa: división entre fijos y eventuales, división entre los de la

principal y los de contratas, división de los trabajadores de contratas entre multitud de empresas, división incluso entre los trabajadores de un mismo empresario que opera con más de una compañía. Este panorama sólo favorece a las empresas.

Es preocupante que los trabajadores de las subcontratas se sientan abandonados y tratados por los comités de empresa y los sindicatos como trabajadores de segunda. Durante el proceso histórico de conformación del movimiento obrero, el sindicalismo de clase, para poder avanzar, tuvo que superar las divisiones entre los trabajadores de una misma empresa por pertenecer a gremios diferentes. En la actualidad, las divisiones entre los trabajadores de un mismo recinto por culpa de la subcontratación son igual de perjudiciales que las divisiones gremialistas. **Superar las divisiones creadas por el fenómeno de la subcontratación masiva y actuar dentro de cada fábrica como un único movimiento obrero, que el problema de unos sea el problema de todos, es una cuestión de ser o no ser para el sindicalismo de clase.**

En este sentido, la mejor fórmula para abordar conjuntamente los problemas es la **formación de secciones sindicales únicas que engloben a los trabajadores de la empresa principal y de las compañías auxiliares.** Dependiendo de la dimensión y la naturaleza de cada problema, una sección sindical única acometería una acción sindical global o sólo en el ámbito de una empresa, exactamente igual que ocurre ahora, donde a veces la acción sindical es en el conjunto de la empresa principal, y otras está limitada a un gremio o una sección de la misma.

2.6 SINIESTRALIDAD LABORAL

En los cuatro últimos años hemos vivido una campaña en todo el mundo contra la llamada "amenaza terrorista". Al amparo de los salvajes atentados de Nueva York en septiembre de 2001, los imperialistas estadounidenses han desatado una intervención brutal contra Iraq en la que han muerto cientos de miles de trabajadores, mujeres y niños iraquíes, y que devastó las infraestructuras básicas del país. Esta manera de combatir el llamado terrorismo integrista con otra forma de terrorismo legalizado por la supremacía militar estadounidense refleja a la perfección el carácter violento del sistema capitalista. Como señalamos al principio de este documento, millones de seres humanos mueren todos los años de hambre, en una auténtica campaña terrorista contra los más débiles y los desposeídos librada en nombre de la economía de mercado.

Pero esta ofensiva no se limita a los países del tercer mundo. **En los países capitalistas desarrollados se produce todos los días una auténtica matanza de trabajadores.** La sangre de miles de obreros riega las cuentas corrientes de los dueños de muchas empresas. Una matanza legalizada por la ley del máximo beneficio y que queda impune en los tribunales de justicia.

A pesar de todas las leyes, como la de Prevención de Riesgos Laborales, los beneficios empresariales siguen incrementándose a costa de la vida y la salud de los trabajadores. Los datos del primer semestre de este año señalan que cada día mueren más de cuatro trabajadores en su puesto de trabajo y más de cuarenta quedan gravemente heridos.

En 2004 perdieron la vida en el tajo o en accidentes *in itinere* 1.443 trabajadores. En los primeros seis meses de 2005, van ya 847 muertos. Respecto al mismo período de 2004, los accidentes laborales con baja se incrementaron un 9,3% y los mortales, el 7,5%. Destaca la construcción, donde el incremento fue del 14,7%. Por otra parte, su aumento en algunas comunidades autónomas es verdaderamente impactante: Madrid, 24,5%; Castilla-La Mancha, 21,5%; Murcia, 18,2%; Euskadi, 17,1%.

En 1996 se aprobó a bombo y platillo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Su aplicación suponía que la siniestralidad iba a disminuir. Lejos de eso, desde 1996 a 2004 los accidentes con baja han sido 8.110.259 (un aumento del 38%), de los cuales 120.295 fueron graves y 13.349, mortales. ¡13.349 trabajadores muertos en nueve años! Estos son los efectos de una auténtica guerra contra la clase obrera.

Las contrarreformas laborales de 1984 (que multiplicó los contratos temporales) y de 1994 (que introdujo las ETTs) supusieron el incremento brutal de los accidentes. En 1984, el índice de siniestralidad era de 53,3 accidentes por cada mil trabajadores, en 1990 era de 68,6 y en 1999 se situó en 72,8. Mientras sigan la precariedad, la subcontratación masiva, etc., es imposible que los accidentes disminuyan sustancialmente. El 50% de los accidentes mortales afectaron a trabajadores con contrato temporal. Un estudio del Ministerio de Trabajo constata que, entre 1996 y 2003, el 70,6% de los accidentes con baja los sufrieron trabajadores con menos de siete meses de antigüedad. El 51% de los accidentes fue en empresas de menos de 50 trabajadores, en las que los accidentes aumentaron un 48%.

La estrecha relación entre precariedad y siniestralidad se ve analizando los accidentes ocurridos a los menores de 24 años. Se incrementaron un 22%, y el

75,6% de los accidentados tenía un contrato temporal. Por otra parte, el 26% de los accidentes mortales y el 22% de los graves tuvieron lugar en empresas contratadas o subcontratadas.

La impunidad de los empresarios es total. De los 955 accidentes mortales en el puesto de trabajo en 2004, sólo se instruyeron 143 procedimientos por homicidio. Incluso lo más aberrante, que prueba la complicidad del aparato de justicia con los empresarios y la clase dominante en general, es que en el último período se han dictado sentencias de Magistratura en las que se responsabiliza de los accidentes a los propios trabajadores, por aceptar las condiciones que los empresarios les imponen. Asimismo, a raíz de las muertes por asfixia de cuatro trabajadores a bordo de una fragata en Navantia-Ferrol el pasado mayo, el juez ha imputado por homicidio involuntario a los dos trabajadores que supuestamente no cerraron la llave del argón.



Compañeros de los seis trabajadores muertos en el viaducto de Granada

2.7 LOS ATAQUES AL SALARIO SOCIAL: LA CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Las conquistas sociales logradas por los trabajadores europeos tras la Segunda Guerra Mundial, el llamado Estado del Bienestar, penden de un hilo cada vez más fino. Desde finales de los años setenta del siglo pasado se ha venido configurando un ataque en toda regla contra estas conquistas, la educación y la sanidad públicas, las pensiones, las prestaciones de los parados, etc.

Las reformas sociales más significativas son consecuencia muchas veces de la lucha revolucionaria. Cuando la clase dominante se encuentra ante la tesitura de perderlo todo por el empuje de la lucha de los explotados, hace concesiones, en algunos casos importantes, pero sin que afecten a la propiedad de los medios de producción ni al poder político, que sigue conservando firmemente en sus manos a pesar de las apariencias democráticas. La Transición española es un buen ejemplo de esto.

La oleada revolucionaria que recorrió Europa tras la Segunda Guerra Mundial fue encauzada por la burguesía, con el inestimable apoyo de la socialdemocracia y el estalinismo, hacia el terreno de las reformas que no cuestionaban en absoluto las relaciones de poder y propiedad burguesas. Así, mediante el desarrollo de determinados servicios sociales, los dirigentes reformistas incrementaron su compromiso

con el aparato del Estado burgués y se convirtieron en los mejores garantes de su estabilidad. Este “colchón social” creado hace casi medio siglo ha ido adelgazando progresivamente en toda Europa, con las inevitables diferencias entre los distintos países.

Muchas de estas conquistas, especialmente las relacionadas con los servicios públicos, están amenazadas. Los capitalistas quieren que dejen de ser públicos y gratuitos o semigratuitos, para convertirlos en fuente de dividendos. La cuestión para ellos es obvia. Si la educación, la sanidad, los servicios básicos de electricidad o agua son imprescindibles, ¿por qué no hacer que los trabajadores paguen más por ellos? ¿Por qué mantener esos servicios en manos del Estado, detrayendo recursos que pueden ir a parar a los bolsillos de los capitalistas, que a su vez se pueden beneficiar de las políticas fiscales y de múltiples subvenciones? Quieren convertirlos en una máquina de hacer dinero liberada de todo control público. Las excusas para la privatización o para la externalización son las de siempre: “hacerlos eficientes”, “aumentar la competencia para abaratar las tarifas”, etc.

Entre 1982 y 2004 se han privatizado empresas por valor de más de diez billones de pesetas, después de ser saneadas con dinero público. De esta manera se le han regalado a los grandes monopolios capitalistas empresas viables y estratégicas. Ahora, con el gobierno de Zapatero, empresas como Renfe, Correos o RTVE están amenazadas de procesos de privatización, con la subsiguiente amenaza para miles de empleos dignos, siguiendo el modelo británico, donde la subcontratación, la precariedad y la subida de precios, junto con un servicio deficiente, campan a sus anchas.

3. El ascenso de la lucha de clases en el Estado español

El rasgo más destacado de los últimos años ha sido la intensísima sucesión de acontecimientos en los que la clase obrera y la juventud fueron parte activa y fundamental.

Podríamos decir que el período que va desde el 20-J (la huelga general del 20 de junio de 2002) hasta las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, que pusieron un fin rotundo a la época del PP, constituyen una etapa que marcará un antes y un después en la situación política del Estado español.

A pesar de que los gobiernos del PP coincidieron con un ciclo expansivo de la economía, la derecha nunca consiguió crear un clima de optimismo y satisfacción entre la clase obrera. Todo lo contrario. El malestar social se fue acumulando, pero durante un tiempo no encontró ningún cauce para expresarse. La llamada oposición de terciopelo del PSOE y la política de pacto social de las cúpulas de CCOO y UGT le facilitaron enormemente las cosas al PP.

Durante años hubo una dinámica en la que los dirigentes de la izquierda, al no hacer frente a los ataques del PP, propiciaban que la derecha apareciese más fuerte de lo que era, justificando así la necesidad de más consenso para evitar el “mal mayor”. Esa situación creaba una atmósfera negativa, sobre todo porque hacía muy difícil que la clase obrera experimentara el verdadero alcance de sus fuerzas.

La huelga general en Galicia del 15 de junio de 2001, convocada por UGT y CIG en respuesta a un decreto de contrarreforma laboral, fue uno de los primeros síntomas del cambio en el ambiente social. Tuvo un seguimiento importante a pesar de la oposición de CCOO, cuya base desoyó las directrices de sus dirigentes. El campamento de los trabajadores de Síntel en Madrid, iniciado ese mismo año y que fue un ejemplo de lucha que se granjeó la simpatía de amplios sectores de la población, y la multitudinaria marcha estatal contra la LOU (Ley Orgánica de Universidades) del 1 de diciembre, convocada por UGT, CCOO y el Sindicato de Estudiantes y secundada por más de 300.000 personas, también reflejaron el cambio en la situación.

En la posterior dinámica ascendente de las movilizaciones jugó un papel trascendental la actitud del PP. En un momento dado, el gobierno, confundiendo la pasividad de los dirigentes sindicales con el ambiente entre los trabajadores, optó por un ataque frontal al movimiento obrero —y a los propios sindica-

tos— con el famoso *decretazo* de recorte de las prestaciones de desempleo, que acabó por desembocar en el 20-J.

En realidad, fue inevitable llegar a ese punto. Como veníamos explicando reiteradamente desde las páginas de EL MILITANTE, las constantes claudicaciones de los dirigentes sindicales sólo iban a conseguir envalentonar a la derecha y la patronal. La firma por parte de Fidalgo del acuerdo de pensiones de 2001 un mes después del *decretazo* de ese año y la marcha atrás de Méndez tras la huelga general en Galicia (había anunciado otra de ámbito estatal para ese otoño) no fueron interpretadas por la burguesía como muestras de “responsabilidad”, sino de debilidad. Y como decimos los marxistas, la debilidad invita a la agresión. Los dirigentes de CCOO y UGT se encontraron en una encrucijada.

Los sectarios descartaban la huelga general porque “Fidalgo y Méndez son unos traidores”. No entendían que la actuación de un dirigente no depende exclusivamente de su voluntad subjetiva, sino que, en última instancia, responde a la situación objetiva de la lucha de clases. Claro que Fidalgo y Méndez son unos pactistas, pero si no hacían nada ante tal agresión, muchos trabajadores se iban a preguntar qué pintaban. No les quedó más remedio que responder. Y aunque para ellos la huelga general era el medio para obligar al PP a que los respetase y así poder volver rápidamente a las cómodas negociaciones (como de hecho pasó), esto no cambió los efectos del 20-J porque, independientemente de las consideraciones subjetivas que la provoquen, una huelga general siempre es un enfrentamiento brutal entre la burguesía y el proletariado.

Las huelgas generales ponen en primer plano las contradicciones sociales, dejan al descubierto la naturaleza de clase del Estado y las instituciones, y tienen hondos efectos en la conciencia, sea cual sea su resultado. Una huelga general no es una huelga más, sino que pone sobre el tapete quién manda en la sociedad. **La burguesía le tiene pánico a las huelgas generales precisamente porque transmiten directamente a la conciencia del conjunto de nuestra clase la idea de que los trabajadores somos los que hacemos que todo funcione, que sin nosotros los empresarios no son nada, que la clase obrera es objetivamente el poder real en la sociedad capitalista.** Durante una huelga general exitosa, la burguesía es impotente y la

clase obrera impone su ley, tiene el poder durante 24 horas. Por tanto, siempre es un poderoso estímulo para elevar el nivel de conciencia, es decir, ayuda enormemente a comprender que todos los trabajadores tenemos los mismos intereses y el valor de estar organizados sindical y políticamente como clase. Por eso sus efectos pueden prolongarse durante años, como se vio en el caso del 14-D de 1988.

3.1 LA HUELGA GENERAL DEL 20-J: EL PRINCIPIO DEL FIN DEL GOBIERNO DEL PP

El 20-J también marcó un antes y un después. A pesar de la pésima preparación por parte de los dirigentes sindicales, la huelga general tuvo un seguimiento masivo. Las manifestaciones fueron históricas, superando todas las previsiones de asistencia y con gran participación de trabajadores jóvenes. El éxito de la huelga general dio la verdadera medida del malestar entre los trabajadores, tanto tiempo contenido y dejó en evidencia la falsedad de la idea, tan machaconamente repetida por los dirigentes sindicales para justificar su propia pasividad, de que “la gente no se mueve”.

El 20-J y su secuela (la marcha estatal a Madrid del 5 de octubre) obligaron al PP a retirar gran parte del *decretazo* (quedaron en vigor la modificación de los salarios de tramitación y aspectos relativos al campo), retirada que reforzó todavía más la sensación de fuerza percibida por los trabajadores en la huelga. Fue, por tanto, una demostración práctica de la bancarrota del sindicalismo pactista y de la validez del sindicalismo de lucha. El impulso del 20-J debió ser aprovechado para corregir el rumbo sindical e iniciar una etapa de movilización en demanda de nuestras reivindicaciones de clase, pero, por supuesto, a los dirigentes sindicales les faltó tiempo para recomponer sus relaciones con el gobierno del PP. Estos dirigentes, alejados durante años de la realidad que se vive en las empresas, sienten la tranquilidad y la rutina como parte fundamental de su función social y de la “estabilidad democrática”. Para ellos no hay perspectiva más inquietante que el tener que estar movilizándose ¡y encima con los trabajadores dando una respuesta a las movilizaciones que supera con creces sus expectativas!

La siguiente gran movilización contra el PP fue a raíz del hundimiento del *Prestige* frente a las costas gallegas, en noviembre de 2002. Durante meses, Galicia vivió un auténtico terremoto político que arrastró a decenas de miles de personas a manifestarse per-



Manifestaciones en Valencia durante la huelga general del 20-J (arriba) y en Madrid durante la huelga de estudiantes y el paro de dos horas convocado por UGT contra la guerra el 10 de abril de 2003

manentemente contra el PP. Las mentiras descaradas de la Xunta y del gobierno central, así como la falta de medios para prever y paliar la catástrofe, elevaron la tensión social al máximo. La participación en las manifestaciones batió récords históricos, mientras los balcones de toda Galicia se llenaban de banderas de Nunca Más.

Las movilizaciones del *Prestige* se fundieron posteriormente con el gigantesco movimiento contra la guerra de Iraq y contra el servilismo de Aznar hacia Bush. Las manifestaciones antiguerra recorrieron todo el Estado, sacaron a la calle a millones de personas y tuvieron desde el principio un marcado carácter antiimperialista.

Dada la presión desde abajo, la dirección UGT se decidió a convocar una huelga general de dos horas contra la guerra el 10 de abril, que tuvo una incidencia muy importante a pesar de la oposición a la convocatoria de un sector de la dirección de CCOO, encarnada en la actitud arrogante de Fidalgo. El malestar de las bases de CCOO contra su dirección alcanzó uno de los momentos más álgidos, sólo superado tres semanas después, cuando Fidalgo fue abucheado de forma generalizada en la manifestación del Primero de Mayo

en Madrid. A la insultante actitud mantenida el 10 de abril se sumaba la protesta de los trabajadores de Síntel, lo que configuró uno de los Primeros de Mayo más difíciles para los dirigentes oficialistas de CCOO.

3.2 LAS JORNADAS DE MARZO Y LA VICTORIA DEL PSOE

Un año y medio de intensas movilizaciones habían mostrado sobradamente la verdadera naturaleza del PP y proporcionado al movimiento una enorme confianza en sus propias fuerzas.

Todo este proceso cristalizó en las jornadas del 11 al 14 de marzo de 2004, tras los atentados terroristas que causaron la muerte de 192 jóvenes y trabajadores en Madrid. Los atentados hicieron reaparecer el ambiente social de las movilizaciones contra la guerra; la actitud del PP, mintiendo sobre unos hechos que traumatizaron a toda la sociedad, fue la gota que colmó el vaso.

En situaciones de efervescencia política, la conciencia de la clase obrera avanza muy rápidamente. Tras unas horas de confusión, la idea de que el PP volvía a las andadas, mintiendo y manipulando, acabó predominando en el ánimo de la población.

De la noche a la mañana, y durante unos días, todos los prejuicios respecto a las normas electorales y la democracia burguesa se esfumaron por completo. Se rodeó la sede del partido del gobierno, hubo manifestaciones ante el Congreso de los Diputados y la gente tomó las calles de todas las ciudades del país la noche anterior a las elecciones generales del día 14, convirtiendo la jornada de reflexión en una jornada de lucha sin precedentes. “Vuestras guerras, nuestros muertos” era la consigna que resumía el sentimiento de odio hacia el PP. La idea de que había que echarlo del gobierno como fuese volvió a estar a flor de piel entre millones de trabajadores y jóvenes, lo que acabó inclinando definitivamente el resultado electoral.

El hecho de que el PSOE ganara las elecciones en un contexto de auge de la movilización y que las masas sintieran la victoria electoral como una conquista propia es algo que preocupa a la burguesía. La consecuencia, tras años de movilización, es evidente: los trabajadores y los jóvenes se sienten mucho más legitimados para exigir al PSOE un cambio sustancial de política respecto al PP, y esto es un inconveniente muy serio para la burguesía.

Esa victoria, no obstante, presenta diferencias notables con las anteriores victorias socialistas. Si bien amplios sectores de la clase obrera vieron con enorme satisfacción la derrota del PP, no es menos cierto

que existe un punto de cautela por la larga etapa de gobiernos socialistas que en el pasado (1982-96) frustraron las esperanzas de millones de personas. En este sentido, fue significativo que la misma noche electoral en que el PSOE festejaba su victoria, la gente concentrada ante su sede de la calle Ferraz gritara “Zapatero, no nos falles”, dejando muy claro que la victoria no significaba ningún cheque en blanco.

3.3 LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ZAPATERO

La burguesía española ha sido históricamente débil y, para garantizar su dominación en condiciones de estabilidad, siempre ha tenido que contar con las muletas de los dirigentes reformistas de la izquierda.

Existen muchas diferencias entre este gobierno y los encabezados por Felipe González y Alfonso Guerra en la década de los ochenta del pasado siglo. La victoria del PSOE en 1982, que electoralmente fue mucho más contundente, dio paso al primer gobierno de la izquierda desde el fin de la dictadura. Por otra parte, los dirigentes del PSOE de entonces emergieron a la escena política al calor de uno de los períodos más agudos de la lucha de clases en el Estado español. Estaban acostumbrados a lidiar con el movimiento obrero y con las tendencias de izquierda existentes en su propio partido, tenían sólidas terminales con las que transmitir sus orientaciones y consignas a través de miles de cuadros y sindicalistas, y contaban con un amplísimo margen de maniobra, como los hechos demostraron.

La cadena de ataques al movimiento obrero empezó ya en 1983, con una reconversión siderúrgica, y continuó en 1984, con la primera gran reconversión del sector naval. La respuesta de los trabajadores afectados fue muy combativa, pero fueron derrotados porque las luchas quedaron aisladas y el gobierno utilizó todo el peso de su autoridad política para justificar sus medidas.

En junio de 1985, el PSOE vive la primera huelga general, convocada en solitario por CCOO contra una reforma del sistema de pensiones que aumentó de dos a ocho años el período para el cálculo de la pensión. A pesar de que el PSOE revalidó la mayoría absoluta en las elecciones generales de 1986, el enfrentamiento con el movimiento obrero se profundizó: el 14 de diciembre de 1988 vio la huelga general más importante de la historia del Estado español, convocada conjuntamente por CCOO y UGT, a la que sucedieron nuevas huelgas generales en 1992 y 1994.

Los gobiernos de la primera etapa socialista se beneficiaron de un auge económico que empezó en la

segunda mitad de la década de los ochenta y se prolongó hasta principios de los noventa. Sin embargo, Zapatero tiene que realizar su tarea en una etapa de crecimiento débil, de retrocesos sociales muy negativos para los trabajadores y con una perspectiva de cambio de coyuntura económica que sólo puede ser a peor.

Sus primeras medidas estuvieron determinadas por el contexto de su victoria electoral. La retirada de las tropas de Iraq, cuyos efectos políticos dentro y fuera del Estado español no se pueden minimizar, fue vista por las masas, correctamente, como producto de su lucha.

Inmediatamente Zapatero se dedicó a presentar un perfil político escorado hacia cuestiones sociales y democráticas. Leyes como la de la violencia de género o la del matrimonio homosexual encontraron un amplio apoyo. Son medidas progresistas que pretenden acabar con situaciones insostenibles, aunque en realidad muchas de estas lacras, como la marginación de las minorías o la violencia contra la mujer, hunden sus raíces en la propia existencia del capitalismo y la opresión de clase.

No obstante, a pesar de toda la cobertura mediática que estas medidas han tenido, el gobierno de Zapatero mantiene una línea continuista en las cuestiones decisivas para los trabajadores y la juventud:

1.- Ninguna mejora en materia salarial, ni en la lucha contra el paro o la precariedad, ni en la reducción de la jornada laboral.

2.- Una política económica cuyo contenido es abiertamente continuista. Presupuestos que ratifican el recorte de los gastos sociales mientras crecen las subvenciones a los empresarios. Negativa a incrementar drásticamente el SMI y a dignificar las pensiones. Sustitución del SMI por el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a efectos de determinadas prestaciones.

3.- Mantenimiento de una especulación inmobiliaria escandalosa, condenando a las jóvenes generaciones a las garras de los especuladores y ofreciendo como alternativa viviendas lilliputienses a precios abusivos.

4.- Reformas educativas que siguen beneficiando a la escuela privada, sin que se incremente sustancialmente el presupuesto para la enseñanza pública.

5.- Concesiones a la Iglesia Católica en materia de financiación o de presencia de la religión en el sistema educativo público.



Policía durante la última huelga convocada al anterior gobierno del PSOE (27-E de 1994)

6.- Mantenimiento de los planes de privatización de la sanidad pública a través de mecanismos encubiertos, privatización de las escasas empresas públicas que quedan y destrucción de miles de empleos en los astilleros públicos.

7.- Reforma fiscal en beneficio de las rentas del capital frente a las del trabajo.

8.- Ley de Defensa Nacional, que ampara intervenciones imperialistas y niega los derechos democráticos en los cuarteles.

9.- Continuas concesiones a los sectores más reaccionarios del aparato del Estado, como se ha revelado con el abandono de la Ley de la Memoria Histórica para reconocer a las víctimas republicanas de la guerra civil y de la dictadura franquista.

10.- Marginación de los inmigrantes, que son considerados como mera carne de explotación a la que no se le reconoce sus plenos derechos políticos, sindicales y sociales.

Muchas de estas medidas han tenido muy poco relieve o han podido ser unguidas de un barniz progresista por dos factores fundamentales: en primer lugar, porque la izquierda —tanto sindical como política— ha apoyado de forma incondicional la gestión de Zapatero, que de hecho se apoya en un pacto de legislatura no formalizado abiertamente. El segundo factor, nada desdeñable, es la actitud del PP. La derecha no ha digerido su derrota electoral y su actitud ultraderechista y cavernícola está generando una aguda polarización política.

La derecha española tiene una tradición histórica que refleja el carácter atrasado y débil del capitalismo español. La clase dominante está acostumbrada a gobernar a través del puño cuartelero, la dictadura y la guerra civil. Y estas señas de identidad, tan escasamente democráticas, siguen pesando.

La actuación de la cúpula del PP en este año y medio de gobierno del PSOE lo evidencia: reacción, autoritarismo, nacionalismo españolista, fanatismo clerical...; lejos quedan ya la demagogia sobre el “viaje al centro” y las conversaciones en catalán en la intimidad. La actitud desafiante de la derecha también se manifiesta en sus intentos de ocupar la calle, sacando decenas de miles de manifestantes contra la “política antiterrorista del gobierno” y la “destrucción de la familia cristiana” o en defensa de la “calidad de la enseñanza” (!!!) y, por supuesto, de la “sagrada unidad de España”.

Los planes de la derecha son evidentes: quieren recuperar el gobierno a toda costa y lo más rápidamente posible. No soportan no mandar. Como es lógico, millones de trabajadores, jóvenes y desempleados no están dispuestos a repetir la pesadilla de los ocho años de gobierno Aznar. Pero no sólo depende de la voluntad de la clase obrera. El gobierno de Zapatero tiene una enorme responsabilidad en que esto no suceda. Para evitarlo, algo perfectamente posible, lo decisivo es que el PSOE lleve a cabo una genuina política de izquierdas y se enfrente decididamente a la reacción. Sin embargo, el gobierno va en la dirección opuesta.

**3.4 MEDIDAS ECONÓMICAS FAVORABLES
A LOS EMPRESARIOS**

El año 2004 acabó con buenas noticias para los empresarios y malas para los trabajadores. La inflación fue del 3,2%, pero el incremento salarial medio pactado en convenio fue del 2,9%. Mientras, los beneficios empresariales se incrementaron en un 18,6% (según la Central de Balances del Banco de España) y los de la banca lo hicieron en un 23,4% (según la patronal bancaria). En el primer trimestre de 2005, el incremento salarial medio en convenio ha sido del 2,8%, mientras la inflación interanual se situó en el 3,5%. Estos datos señalan que la política de topes salariales se ha mantenido bajo el gobierno de Zapatero, facilitando un enorme trasvase de plusvalía a los bolsillos de los capitalistas.

En la nueva contabilidad nacional ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística se señala que el Estado español es 40.000 millones de euros más rico y cuenta con un millón más de empleos, lo que confirma algo ya sabido: el papel de la mano de obra inmigrante en la generación de beneficios durante la última década. Sus salarios miserables y sus condiciones de trabajo draconianas están detrás del incremento fabuloso de las ganancias empresariales.



Manifestación de trabajadores de astilleros

De esta nueva contabilidad nacional también se desprende otro dato: empeora la participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza. Las rentas salariales pasaron de representar el 49,3% del PIB al 47,7%, mientras que los beneficios empresariales aumentan dos puntos porcentuales, hasta alcanzar el 41,8%.

El gobierno ha presentado como un eje central de su política económica cumplir con los acuerdos del plan de austeridad aprobado por la Unión Europea. Esto significará nuevos planes de ajuste en todos los ámbitos, entre los que destaca una nueva contrarreforma laboral.

El crecimiento económico, tan destacado ahora por los representantes del PSOE, está basado en los mismos pilares que durante los años del PP. Por un lado, un endeudamiento familiar espectacular que, según el Banco de España, en septiembre equivalía a 616.700 millones de euros, un importe superior a la renta bruta disponible por las familias, lo que anula completamente la capacidad de ahorro. Y por otro lado, el boom de la construcción, que aporta el 18% al PIB y está alimentado por el flujo de capitales especulativos, que encuentran una abultada rentabilidad en este sector, en detrimento de la inversión productiva, y por los bajos tipos de interés, que facilitan el endeudamiento de los trabajadores de por vida. El incremento espectacular de los beneficios bancarios se debe a este fenómeno. ¡En mayor o menor medida todos trabajamos para los bancos!

Los desequilibrios del capitalismo español son potencialmente explosivos. Según el Banco de España, el patrimonio inmobiliario de las familias está sobrevalorado en un 20%. Una subida de los tipos de interés puede tener efectos dramáticos, provocando un incremento desmedido de los impagos y la morosidad, por no hablar del efecto que una reducción en la creación de empleo de unos cuantos puntos porcentuales tendría en el impago de las hipotecas.

El gobierno de Zapatero, con Solbes como estrategia económico, se mantiene en la falsa creencia de que los abultados dividendos empresariales generarán el empleo y la estabilidad política del futuro. Si mantiene esta orientación, más pronto que tarde chocará frontalmente con el movimiento obrero. La lucha de los astilleros, la de la minería o las dificultades para llegar a un acuerdo en las negociaciones de la nueva reforma laboral son buena prueba de ello.

3.5 LA LUCHA DE LOS ASTILLEROS

El primer test sobre la política económica del PSOE y su relación con el movimiento obrero fue la reconversión de Izar.

El gobierno partió de un esquema sencillo. Creyó que echándole toda la culpa a la mala gestión del PP y a la inevitabilidad de cumplir los requisitos impuestos por la Unión Europea podría evitar el enfrentamiento con los trabajadores, apoyándose además en el reciente vuelco electoral y en la inestimable colaboración de los dirigentes sindicales.

Pero los acontecimientos fueron más lejos de lo que preveían. El plan presentado por la SEPI a principios de septiembre de 2004, un mero plan de privatizaciones y reducción de plantillas, desató una reacción inmediata y contundente por parte de los trabajadores, que protagonizaron manifestaciones muy masivas y radicalizadas, con un gran impacto social en las zonas afectadas. En muchas manifestaciones, la participación de la población fue casi total.

Detrás de la masividad y la contundencia de la movilización subyacía la conciencia, por parte de los trabajadores, de que el plan de la SEPI era otra reconversión más que, como todas las anteriores, sólo iba a significar un futuro más sombrío y ninguna solución.

Otro de los síntomas interesantes que reveló este conflicto es la tremenda dificultad que tienen los dirigentes sindicales para contener a los trabajadores cuando éstos se ponen en marcha. Casi todas las iniciativas de movilización partieron desde abajo, los dirigentes se veían literalmente arrastrados por la enorme presión de las asambleas. Durante el conflicto se vieron elementos de indisciplina sindical, hecho que establece un hilo conductor con luchas como la de Repsol Puertollano o la reciente de la minería, o con el carácter indefinido de muchas huelgas en los últimos años.

La fuerza del movimiento de los trabajadores de Izar en defensa de los puestos de trabajo obligó, en un momento determinado, a que la SEPI retirara su plan inicial, prometiendo presentar otro más acorde

con las exigencias sindicales, circunstancia que los dirigentes sindicales aprovecharon para frenar las movilizaciones y enfriar el ambiente. Finalmente, la SEPI, aprovechando la parálisis propiciada por los dirigentes sindicales, volvió a la carga con un nuevo plan casi idéntico al inicial.

Si los dirigentes sindicales hubiesen adoptado una estrategia de extensión de la lucha para hacer de la solución que el gobierno le diese a Izar un test sobre si Zapatero “fallaba o no fallaba”, la presión política sobre el PSOE habría permitido una victoria contundente. Pero los dirigentes sindicales contuvieron la lucha en el ámbito local, nada de extenderla a otros sectores. De hecho, ni siquiera llegaron a unificar la lucha en todo Izar: no organizaron una huelga general conjunta en todas las zonas afectadas, ni una marcha a Madrid, lo que era perfectamente factible y hubiera supuesto un cambio cualitativo en la repercusión del conflicto. Por supuesto, nunca le dieron al conflicto una perspectiva política más amplia, tratando de ligarlo a la necesidad de obligar al PSOE a hacer una política realmente favorable a la clase obrera, basándose en el impulso dado por las elecciones y toda la movilización que la precedió.

La SEPI y el gobierno finalmente se salieron con la suya, aunque tuvieron que suavizar el plan inicial y acceder a que las factorías de Puerto Real y Fene siguieran siendo públicas. Ganaron exclusivamente por la falta de una alternativa de lucha consecuente por parte de los dirigentes sindicales.

Este conflicto y el de la minería pusieron de relieve que el gobierno va a tener grandes dificultades si sigue en la línea de llevar a la práctica ataques en el terreno laboral y social. La idea de que sólo movilizándose es como se pueden cambiar las cosas sigue prevaleciendo entre los trabajadores.

3.6 LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El 4 marzo de este año, la CEOE y los dirigentes de UGT y CCOO firmaron el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) para 2005. El documento está plagado de buenas intenciones y deseos para los trabajadores y los empresarios, pero sólo contiene una medida concreta: una subida salarial del 2% en la negociación colectiva, lo que garantiza una nueva pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Los trucos contables introducidos por el PP en el cálculo de los precios han falseado el IPC. Se contabilizan productos de lujo cuya compra está muy limitada a las clases adineradas, mientras que los de primera necesidad, los que más repercuten en las fami-

lias obreras, pierden peso en el cómputo. De hecho, todo el mundo está convencido de que la subida de los precios a consecuencia del euro fue mucho mayor de lo que reflejaron las estadísticas. Además, el precio de la vivienda no se incluye en el IPC. Esto no es casualidad, pues todos los convenios negocian los salarios en función de este índice. ¿Qué ocurriría si el precio de la vivienda se introdujera en el IPC? Lo podemos comprobar analizando los datos del Ministerio de Vivienda: entre 1987 y 2004, el precio del metro cuadrado urbanizable subió un 448,25% (un 300% en el caso de la vivienda nueva), mientras que en ese mismo período el salario bruto sólo subió un 104,05%.

Respecto a los beneficios empresariales, entre 1998 y 2004 aumentaron un 65%, mientras que la subida salarial fue del 20,96%. ¡Y todavía hablan de que es necesario reducir más los salarios de los trabajadores!

En este contexto, el AINC vuelve a incidir en la política de pacto social, cuando lo que la situación exige es lanzar una ofensiva en toda regla contra las ambiciones de una patronal que no se conforma con nada. Asumir como buena la idea, tal como han hecho los dirigentes sindicales, de que la moderación salarial es la palanca para incentivar la inversión y generar más empleo sólo está sirviendo para aumentar escandalosamente los beneficios empresariales. De hecho, se está dando una paradoja: en los procesos de negociación colectiva son los empresarios los que llevan la iniciativa, con pliegos reivindicativos que pretenden eliminar las conquistas del período anterior no sólo en materia salarial, sino también en jornada, vacaciones, pluses, ritmos, etc.

En los últimos años, la negociación colectiva ha estado marcada por los acuerdos interconfederales entre patronal y sindicatos, donde permanentemente se insiste en la moderación salarial, con unas previsiones de inflación que no se han cumplido nunca. Este incumplimiento no es un pequeño detalle. En 2004, el 26,98% de los trabajadores con convenios firmados no tuvieron cláusula de revisión salarial. Salvo en 2003, la inflación ha superado con creces a las subidas salariales pactadas, con lo que los millones de trabajadores sin cláusula de revisión salarial perdieron sistemáticamente poder adquisitivo.

La política de los dirigentes sindicales de pacto social permanente ha traído como consecuencia la atonía de la negociación colectiva y la reducción del número de convenios, que pasaron de 5.110 en 1999 a 4.179 en 2004, afectando tanto a los convenios de empresa como a los de sector. En el mismo período, el número de trabajadores con convenio bajó de

9.008.053 a 7.799.694. Pero quizá la cifra más preocupante es que, según el Ministerio de Trabajo, en 1999 estaban regulados por convenio el 75,9% del total de los trabajadores asalariados, mientras que en 2004 sólo lo estaban el 51,9%, lo que significa que alrededor de siete millones de trabajadores no tienen convenio. Es decir, la falta de acción sindical por parte de los dirigentes de CCOO y UGT está suponiendo un retroceso en las condiciones laborales de millones de trabajadores.

Por otra parte, los convenios firmados en el período 1999-2004 no redujeron perceptiblemente la jornada laboral. En 1999 la jornada anual media pactada fue de 1.765,03 horas, mientras que en 2004 fue de 1.755,82, una reducción de 9,21 horas en cinco años de bonanza económica. Además, es indiscutible que, en la mayoría de las empresas, la jornada real se ha incrementado a través del mecanismo perverso de las horas extras, que ya se consideran casi inevitables debido a la caída de los salarios reales.

Todos estos hechos reafirman el abecé del sindicalismo de clase: la burguesía no va a conceder nada a los trabajadores sin lucha. Recientemente, José María Cuevas anunciaba desafiante que “la CEOE no va a aceptar más rigideces en las relaciones laborales. Que les quede claro al Gobierno y a los sindicatos” (*El País*, 22/06/05). Estas declaraciones eran apoyadas al día siguiente por las del gobernador del Banco de España, para el que es necesario que las empresas “tengan capacidad para adaptarse a las diferentes situaciones”, es decir, que tengan más facilidades para despedir. Además planteó que los salarios tenían que estar ligados a la productividad, y no a los precios.

3.7 LA NUEVA CONTRARREFORMA LABORAL

Todas las contrarreformas del mercado laboral y de las pensiones desde 1982 han sido un atentado contra los intereses de las familias obreras. A través de los diferentes gobiernos del PSOE o del PP, la burguesía intenta eliminar todas las conquistas que el movimiento obrero alcanzó en los años setenta, en plena ofensiva contra la dictadura. El objetivo siempre es el mismo: abaratar la mano de obra, facilitar el despido, reducir las prestaciones y subsidios por desempleo, recortar las pensiones y acabar con el empleo fijo y con derechos. En definitiva, favorecer, mediante la legislación, una mayor explotación de la fuerza de trabajo.

Las consecuencias de las sucesivas contrarreformas han sido demoledoras: generalización de los contratos temporales y de la subcontratación, aumento del período para el cálculo de la pensión (de 2

a 8 años en 1985, y de 8 a 15 en 1996), el contrato fijo barato con una indemnización por despido improcedente de 33 días por año y tope de 24 mensualidades (frente a los 45 días y 42 mensualidades del contrato fijo antiguo), las ETTs, el recorte del subsidio agrario y la desaparición práctica de los salarios de tramitación, etc.

Muchas de estas contrarreformas fueron pactadas con los dirigentes de UGT y CCOO, especialmente bajo el mandato del PP. De esta manera, se asfaltó el camino a una acción depredadora por parte de los capitalistas, que ha colocado al Estado español a la cabeza en cuanto a precariedad, siniestralidad y moderación salarial. El director de relaciones laborales de la CEOE, Fernando Moreno, reconocía en una entrevista la importancia decisiva de esa colaboración sindical: “España es el único país del mundo que mediante acuerdo de la CEOE y los sindicatos consiguió abaratar el precio del despido. Eso dice mucho en favor de los sindicatos” (*La Voz de Galicia*, 10/4/05).

Zapatero anunció como un eje fundamental de su política el alcanzar un acuerdo con sindicatos y patronal para una nueva reforma laboral. Las intenciones del gobierno ya fueron adelantadas por el propio Zapatero cuando, en su reunión con José María Cuevas, dejó claro que no era su intención abrir un debate sobre las 35 horas: “Lo que se necesita es trabajar más”, sentenció Zapatero para regocijo de la CEOE. Por tanto, los supuestos de los que parte el PSOE para la nueva reforma, ya manifestados por los ministros de Trabajo y de Economía, son los de siempre: abaratamiento del despido y una mayor desregulación del mercado laboral.

Sin embargo, los argumentos del gobierno chocan con la evidencia. Según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) y de la oficina europea de estadísticas Eurostat analizados por UGT, el Estado español, aunque aporta a la zona euro el 7% de la ocupación total, concentra el 26% de los trabajadores eventuales y el 20% de los accidentes laborales. Dicho de otro modo, nuestra temporalidad y siniestralidad triplican las de la zona euro.

La temporalidad no baja del 32%, y en cifras absolutas no deja de crecer: actualmente el número de trabajadores precarios se acerca a los cinco millones. El abaratamiento del despido pactado en 1997 no mejoró la situación. La precariedad la sufre principalmente la juventud: el 48% de los menores de treinta años (un tercio de los asalariados) son eventuales. Esta lacra se ha extendido vergonzosamente al sector público, donde entre 1998 y 2004 la eventualidad aumentó un 50%.



Respecto a los costes del despido, otra de las obsesiones de la patronal, estudios comparativos concluyen que, desde 1998, se han reducido más que en ningún otro país de la OCDE, sin que esto tampoco haya tenido ninguna incidencia en la reducción de la temporalidad.

Tras EEUU, Reino Unido y Canadá, el Estado español es el país industrializado con menor protección legal al empleo fijo. La reducción de la protección contra el despido de los trabajadores fijos ha ido acompañada del salto en la tasa de temporalidad, que pasó en los últimos quince años del 23% al 33%.

En el aspecto salarial, otro argumento central de los empresarios para exigir otra contrarreforma laboral, de nuevo la realidad desmiente la propaganda patronal.

Según un estudio de UGT con datos de Eurostat, el coste medio anual por hora trabajada en los sectores industrial y de servicios no aumentó entre 1999 y 2003. Sin embargo, en el resto de los países comunitarios el incremento superó el 10%. Según un estudio del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, los salarios medios de los trabajadores están solamente un 0,9% por encima de los de 1997. Esta evolución de los salarios contrasta con la de los beneficios empresariales. El estudio informa que en nuestro país se elevaron un 44 % entre 1999 y 2003, la tasa más elevada de la Europa de los Quince, exceptuando Irlanda.

Las propuestas de la CEOE no tienen desperdicio: la principal es la imperiosa necesidad de facilitar el despido. Junto a ésta, hay otras, como la reforma de la negociación colectiva, de la que pretenden eliminar las cláusulas de revisión salarial, ligar las subidas salariales a la inflación de la zona euro y dar libertad a los empresarios para adherirse a los convenios sectoriales. De esta manera pretenden romper el potencial

de lucha sectorial que tenemos los trabajadores, que hoy por hoy los dirigentes sindicales no utilizan, pero que sí se podría utilizar con una política sindical combativa y con una perspectiva de clase. En definitiva, se trata de atomizar y debilitar a los trabajadores y sus organizaciones.

Otra línea de ataque son las pensiones públicas, que quieren que se calculen con las cotizaciones de toda la vida laboral, lo que reduciría drásticamente su importe y forzaría a contratar fondos de pensiones privados con la banca. La excusa, como siempre, es la supuesta amenaza de quiebra del sistema, que bancos como el BBVA, interesados en ese suculento negocio, ya pronosticaban para el año 2000. Sin embargo, esto es pura propaganda ideológica, como demuestra la realidad: la Seguridad Social aumentó sus afiliados en un 50% en sólo diez años (12.307.600 en 1995; más de 18 millones en la actualidad), hasta el punto de que en 2004 tuvo el mayor superávit de su historia.

Por su parte, la propuesta del gobierno hace grandes concesiones a la patronal, empezando por la generalización del contrato fijo barato pactado en 1997, lo que significa aceptar la idea empresarial de que la precariedad se debe al coste excesivo del despido. La extensión de los períodos de prueba (durante los cuales se puede rescindir el contrato), la reducción de cuotas patronales, el aumento de las subvenciones a los empresarios, la disminución del control administrativo en los despidos colectivos o la introducción de nuevas causas de despido objetivo para las subcontratas son otros aspectos de la propuesta.

También son decepcionantes las enmiendas del gobierno a la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Acepta parcialmente la subcontratación en cadena (sólo a partir de la tercera contrata quedaría prohibido seguir subcontratando, aunque con posibilidad de una cuarta en casos excepcionales) y establece un cupo de empleos fijos de solamente el 10% durante los dos primeros años de vigencia de la ley y del 20% a partir del tercero, lo cual no rebaja sustancialmente el actual nivel de precariedad, que es de casi el 100%, como implícitamente se deduce de los porcentajes que propone el gobierno.

Los trabajadores nos enfrentamos una vez más a una gravísima amenaza de retrocesos en nuestros derechos ante la presión de la burguesía, la “comprensión” del gobierno del PSOE y la renuncia de los



dirigentes sindicales a la lucha. Los que comandan la política económica del gobierno siguen los dictados de la economía burguesa actual: estimular a los ricos ofreciéndoles jugosas ganancias y hundir a los trabajadores en la más estrecha necesidad, para que tengamos que trabajar a cualquier precio.

La experiencia nos dice que, si no hay una actitud decidida de frenar los ataques, lo único que produce el “diálogo social” son recortes de derechos. No se trata de la buena o mala voluntad de las partes, sino de la lógica del capitalismo, que tiende a un conflicto irreconciliable entre las clases a medida que la tarta del crecimiento económico se achica. Sin embargo, muchos dirigentes sindicales creen que aceptar la lógica del sistema es la única manera de mantener los puestos de trabajo, atraer inversiones productivas y, en definitiva, sobrevivir. Se equivocan totalmente. Los resultados de esta política “realista”, aplicada en los últimos veinte años, están a la vista: destrucción de empleo digno, precariedad creciente, empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, y un futuro más negro para las nuevas generaciones.

Los gravísimos problemas de los trabajadores exigen una respuesta clara y firme: acabar con la precariedad, defender las pensiones públicas y los derechos de protección en caso de despido, mejorar los sistemas de protección social, mejorar los salarios. Estas son las cuestiones que los sindicatos tienen que poner como primer punto de la orden del día de la acción sindical.

Debemos exigir que en los sindicatos se abra un amplio debate interno sobre los objetivos del diálogo social. Se debe dar participación a todos los trabajadores, informando y debatiendo en todas las empresas sobre la importancia de lo que está en juego. Y no se puede aceptar ningún retroceso más.

La patronal y quienes la apoyan hace tiempo que están de campaña, llenando páginas y páginas exigiendo más ataques a los derechos de los trabajadores. Sólo la clase obrera movilizadada, y ésta es la idea

en la que es necesario insistir dentro de los sindicatos, puede, en primer lugar, parar este golpe y, en segundo lugar, forzar al gobierno del PSOE, elegido por los trabajadores, a tomar medidas que contribuyan a la mejora de la situación laboral, económica y social de la clase obrera.

3.8 NUEVAS AMENAZAS: EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

Según datos de la patronal del automóvil, sobra la cuarta parte de la capacidad instalada en las fábricas de automoción de Europa. A finales de 2004, el sector automovilístico europeo daba empleo a más de dos millones de trabajadores. En EEUU la cifra era de 1.150.000 y en Japón, de 650.000. Este sector, una de las ramas de la producción con más peso en la economía mundial, sufre una profunda crisis de sobreproducción. Los grandes monopolios se hallan en una guerra de precios que amenaza miles de empleos. Es una prueba más de la anarquía de este sistema: las necesidades de la humanidad crecen, pero el capitalismo no sólo es incapaz de utilizar toda la capacidad productiva instalada, sino que la reduce. La destrucción de fuerzas productivas —y el trabajo humano es la más importante de ellas— es actualmente una condición *sine qua non* para garantizar los fabulosos beneficios de los miembros de los consejos de administración y los grandes accionistas. Sobre estos individuos no pende la amenaza del paro.

En estos momentos, el Estado español es el séptimo productor mundial de coches, el tercero de Europa y se sitúa en la cuarta posición en cuanto a exportación de turismos, por detrás de Japón, Alemania y Francia. A principios de este año, el sector empleaba a 72.453 trabajadores y las empresas proveedoras, a 252.550. La paradoja es que, mientras en el primer semestre de este año se ha registrado un récord de ventas (809.708 unidades, cifra similar a las ventas totales de 1995), la producción ha descendido en los ocho primeros meses un 8,69%, cifra que se eleva al 12,42% si consideramos sólo los turismos. La feroz competencia de Asia y la saturación del mercado hacen que, a pesar de los bajos tipos de interés, no sea posible absorber la producción mundial de coches en las condiciones de un mercado capitalista que debe asegurar, antes que nada, los beneficios empresariales.

En este marco se ha desatado una auténtica ofensiva de la patronal. Los casos más emblemáticos son Seat y General Motors, aunque anteriormente fueron Mercedes o Volkswagen. Es un pulso con batallones pesados del proletariado industrial, un pulso que, como en Alemania, tiene como objetivo

empeorar las condiciones laborales conquistadas tras luchas muy duras.

Desde antes del verano, el presidente de Seat vino planteando la reducción de plantilla o de jornada laboral (con el consiguiente recorte salarial, por supuesto). La multinacional presentó un expediente de despido de 1.348 trabajadores por el cese de la producción de los modelos Inca y Caddy, y la caída de un 6% de las ventas en los mercados europeos en lo que va de año. Los directivos de Seat han planteado reducir los sueldos de sus 16.000 trabajadores un 10-15% como condición para mantener el empleo. Con este recorte salarial, la empresa se ahorraría más de 50 millones de euros, que pasarían a engrosar los beneficios empresariales (44,9 millones de euros en 2004, un incremento del 7,7% respecto al año anterior). Además, la facturación de Seat, a pesar del descenso de las ventas, se incrementó un 6,1% en 2004, alcanzando los 5.861 millones de euros. Pero todo esto no es suficiente para los capitalistas. Pretenden exprimir todavía más a los trabajadores, para seguir incrementando sus beneficios.

La “flexibilidad” pactada por las direcciones de UGT y CCOO para capear las caídas de producción (la llamada “bolsa de horas”) es ahora para la dirección “completamente insuficiente”. La plantilla adeuda más de 30 días de trabajo y, según los planes de la empresa, no hay previsión de que la producción vaya a despegar en los próximos meses. Como se ve, la compañía está dando toda una serie de pasos para justificar sus medidas draconianas.

Ante estos ataques, lo peor que pueden hacer los dirigentes de UGT y CCOO es entrar a negociar con la dirección de la multinacional “posibles soluciones”, “diseñar una estrategia conjunta” o dar por hecho que va a haber recortes de plantilla, como dijo el presidente del comité de empresa, Matías Carnero (UGT). Detrás de los planes de reestructuración de Seat no sólo hay destrucción de empleo, sino también peores condiciones de trabajo, incremento de los ritmos de producción y recorte de salarios. No se puede estar a la defensiva. La experiencia de las “reestructuraciones” anteriores demuestra que las concesiones no sirven para contener los ataques de las multinacionales, sino para todo lo contrario.

Una situación muy similar se está produciendo en la planta de General Motors en Figueruelas (Zaragoza). La empresa amenaza con trasladar la producción del próximo modelo del Opel Meriva a la planta de Gliwice (Polonia), lo que supondría la pérdida de 3.000 empleos directos. Para ello han organizado una especie de “subasta” en la que ambas fábricas deben presentar sus propuestas para hacerse con el nuevo modelo.

La dirección zaragozana, tras unas semanas jugando al escondite, presentó un plan que en la práctica es una declaración de guerra a la plantilla: eliminación de la prima de participación, congelación de la antigüedad... Un aperitivo de lo que traería el próximo convenio colectivo (en 2008): incrementos salariales de la mitad de la inflación, más externalización, más flexibilidad, eliminación de dos pausas diarias (20 minutos), todo con la excusa de que los trabajadores polacos cobran menos de un 25% que los españoles. Al igual que en el caso de Seat, el objetivo es continuar llenando los bolsillos de los dueños y accionistas de la multinacional, a expensas de las condiciones laborales. Aunque el rechazo de la plantilla al plan ha sido muy mayoritario, la respuesta de los dirigentes sindicales ha sido bastante tibia por el momento, dando por hecho la inevitabilidad de algún recorte.

La ofensiva de la patronal exige unificar la lucha de los trabajadores del automóvil en todo el Estado. Los problemas de los trabajadores de Seat y General Motors son exactamente los mismos y, por tanto, la solución es la misma. Es imprescindible que los sindicatos de clase rechacen estos planes y planteen un plan de lucha enérgico y contundente para defender las conquistas obreras y mantener todos los puestos de trabajo.

3.9 POR UNA REFORMA AGRARIA INTEGRAL

Hoy, igual que hace siglos, la característica de las explotaciones agrícolas del Estado español, en particular las andaluzas, sigue siendo la gran propiedad terrateniente escasamente modernizada. El 3% de los propietarios posee el 54% de las tierras cultivables, unos 13 millones y medio de hectáreas, una superficie mayor que Andalucía y Extremadura juntas. A estas enormes extensiones hay que añadirles una parte importante de los terrenos forestales, especialmente en manos de familias nobiliarias. La duquesa de Alba es la mayor terrateniente de España.

Ante una desigualdad tan flagrante, lo único que puede causar extrañeza es que la expropiación de esta aristocracia parasitaria y caduca no sea un clamor popular. Por el contrario, los defensores de la propiedad privada presentan esta situación como un "derecho natural", y al sistema capitalista, como el único posible.

La nacionalización de los grandes latifundios y monopolios de comercialización de los productos agrícolas, bajo control obrero, y la puesta en marcha de una producción agrícola planificada sobre las bases de una economía socialista es una aspiración que res-

ponde a una necesidad social, a una necesidad material e histórica. Esta es la única forma de llevar a cabo una genuina reforma agraria que acabe para siempre con la esclavitud del trabajo jornalero y garantice a toda la población precios asequibles de los productos del campo.

En Andalucía y Extremadura se concentran más de 600.000 trabajadores agrícolas, el 65% del total estatal. De estos, más del 90% son temporeros que constituyen la mano de obra en las campañas agrícolas (un 15% de ellos podrían ser considerados como fijos discontinuos, al estar ligados a las empresas durante más de 6 meses al año, aunque sin contrato y con las mismas condiciones de eventualidad).

La figura del jornalero despedido diariamente al final de su jornada responde a las necesidades de producción capitalistas en el campo y a los intereses de los propietarios de la tierra. No es posible acabar con esta situación mientras la tierra siga en manos de unos cuantos terratenientes y la producción esté al servicio del capital y el mercado.

Es en este panorama donde se inserta la defensa del subsidio agrícola. El acceso a un subsidio, a un sistema complementario de ayudas, es un derecho de los trabajadores agrarios. No es una limosna ni un regalo, es una conquista de la clase obrera para paliar la insostenible precariedad laboral en el campo. Mientras los trabajadores no se aseguren contratos estables y mientras el paro persista, es un derecho que existan el subsidio y los programas de ayudas estatales para que los jornaleros compensen las rentas que les niega la oferta laboral privada. Si les quitan el subsidio, que les den la tierra.

La lucha por conseguir mejorar el subsidio y por dignificar las condiciones de vida de los obreros agrícolas está a la orden del día, tanto en el plano político como en el sindical.

El PSOE prometió que, si llegaba al gobierno, eliminaría de inmediato los recortes y restricciones que el PP introdujo en el subsidio a través del *decretazo* de 2002. Sin embargo, hasta ahora no se derogó la Renta Agraria. Esta modalidad de subsidio la impuso el *decretazo* y a ella están obligados a acogerse todos los trabajadores que solicitan el subsidio por primera vez o que llevan más de tres años sin cobrarlo. Este nuevo sistema ya ha privado de subsidio a decenas de miles de trabajadores, especialmente a jóvenes, inmigrantes y mayores de 45 años. De mantenerse, llevaría progresivamente a la desaparición de las ayudas, como demuestra el hecho de que los perceptores no pueden cobrar esta prestación más de seis veces. A partir de ese momento, pierden el derecho a la protección.



Manifestación del Sindicato de Obreros del Campo

La supresión de los aspectos negativos de la Renta Agraria, recuperando la situación anterior al *decreto*, sería un primer paso para mejorar el sistema, pero insuficiente. Es necesario aumentar la cuantía de la prestación, dignificar el mundo rural y extinguir las prácticas caciquiles que perviven en un sistema de subsidiariedad y dependencia del patrón:

a) Incremento del subsidio hasta el 100% del Salario Mínimo Interprofesional. A partir de este mínimo, elevación gradual de la prestación según las peonadas (días trabajados), hasta un importe máximo. Así se estimularía al trabajador para exigirle a la patronal que le reconozca todas sus peonadas. En el sistema actual, la patronal no declara a la Seguridad Social muchas de ellas, y el trabajador tampoco las reivindica porque sólo necesita 35 para acceder al subsidio. Esto permite al empresario utilizar esta bolsa para establecer una red clientelar, fundamentalmente entre los trabajadores con dificultades para alcanzar las 35 jornadas y dependientes de la caridad del patrón o, incluso, de la compraventa de peonadas.

b) Compatibilidad del cobro del subsidio con el trabajo efectivo para los mayores de 52 años que son beneficiarios de una prestación durante todo el año. El subsidio es insuficiente y obliga a estos trabajadores a mantener la actividad sin estar declarados, lo que favorece el caciquismo y el tráfico de peonadas.

c) No a la discriminación de los jóvenes. A los menores de 25 años sin cargas familiares se les exige acreditar al menos 53 peonadas para poder acceder a la totalidad del subsidio.

Además, los trabajadores eventuales del campo tienen una protección social claramente inferior y discriminatoria respecto al resto de trabajadores por cuenta ajena. La pensión media apenas supera los 400 euros, y esto a pesar de que su cotización a tra-

vés de una cuota mensual (el sello) es mayor en comparación con los trabajadores del régimen general. No se reconoce el derecho a la jubilación anticipada. Las indemnizaciones por enfermedad o baja laboral son miserables (en torno a los 15 euros diarios) y para acceder a ellas aún se necesita la firma del patrón. El desempleo contributivo es inalcanzable para la mayoría de los trabajadores eventuales e injusto para los pocos que pueden acceder a él: se cobran tres meses en lugar de cuatro, la cuantía de la prestación es inferior y no hay derecho a disfrutar de la ayuda familiar.

Esta situación se debe en parte a que, a diferencia del régimen general, la patronal agraria no cotiza por estas contingencias en la cantidad suficiente. La propia legislación permite

que los empresarios agrícolas tengan numerosas bonificaciones y exenciones a la Seguridad Social, con lo que, en la práctica, el trabajador es quien financia sus escasos derechos sociales.

Esta situación no puede continuar. Los trabajadores del campo deben tener los mismos derechos que el resto de los asalariados, adaptados a las peculiaridades del empleo agrícola y manteniendo el sistema compensatorio del subsidio en Andalucía y Extremadura.

3.10 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BANCO DE PRUEBAS DE LA PRECARIZACIÓN Y LA CONGELACIÓN SALARIAL

En el verano, Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, anunció un plan de rejuvenecimiento de la plantilla de la Administración central mediante jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas voluntarias para el personal de entre 58 y 64 años (unos 25.000), con el objetivo de “ajustar la plantilla a las necesidades de la sociedad” y acabar con la discriminación que este colectivo sufre frente a los trabajadores de la empresa privada.

Resulta paradójico que los mismos que no dejan de lanzar globos sonda sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación porque el sistema de pensiones no se sostiene, que niegan a profesionales del sector público, como los bomberos, el derecho a que se les adelante la edad de jubilación y que no atienden las principales demandas sindicales de los empleados públicos, algunas con sentencia judicial de por medio —como el derecho a la cláusula de revisión salarial o la eliminación de la alta tasa de temporalidad existente en la Administración (22,8 % de media; 29% en la sanidad)—, se preocupen tanto por los trabajadores de la función pública.

Este *plan Renove* hay que ponerlo en consonancia con el informe que el gobierno encargó a una comisión de expertos, para la elaboración de un estatuto básico del empleado público, donde se responsabiliza del mal funcionamiento de la Administración a los trabajadores. La causa de ello, según dichos expertos, es que, aun reconociendo que los empleos públicos han de tener continuidad y estabilidad, no han de tener carácter vitalicio, algo “perjudicial” para la productividad. Con esta excusa se anuncian medidas como la prejubilación y la necesidad de abrir la Administración a la utilización de cualquier tipo de contrato de la actual legislación laboral.

Así que, tras esta justificación, que conecta con los prejuicios extendidos contra los empleados públicos, se pretende sustituir a personal fijo y con derechos por trabajadores en precario, sin derechos y mal pagados. Todo en la línea de privatizar los servicios públicos, lo que no supondría ningún ahorro para la Administración, sino que en muchos casos implica más gastos porque las empresas privadas que optan a la externalización de servicios públicos lo hacen para enriquecerse, sin importarles la calidad del servicio, empleando a trabajadores sin derechos y en ocasiones obligando al usuario a pagar una tasa. Es bien sabido que “lo público es servicio, lo privado es beneficio”.

Por otra parte, el pasado 28 de julio sindicatos y gobierno suscribieron, en el seno de la Mesa General de la Función Pública, un acuerdo de similares características a los de años anteriores y que, como aquellos, renuncia a reivindicaciones fundamentales, como la cláusula de revisión, la recuperación del poder adquisitivo o la desaparición del límite en la tasa de reposición.

Parece evidente que el único objetivo del PSOE en la Administración pública es reducir los costes de personal y sustituir un empleo estable y con derechos por contratos precarios, con la excusa de que existen demasiados empleados públicos. Mientras tanto, la realidad es que en los hospitales hay gente hacinada en los pasillos, las listas de espera para cirugía o consulta al especialista son interminables, las familias no tienen guarderías públicas para sus hijos, no hay un servicio público de atención a personas mayores o dependientes, el personal en institutos y colegios es claramente insuficiente, al igual que en la Inspección de Trabajo, Hacienda, Extranjería, etc. En este país no sobra ningún empleado público, al contrario, se necesitan muchos más: miles de profesionales y especialistas en paro que podrían poner sus conocimientos al servicio de la sociedad.

3.11 LA MUJER Y LA JUVENTUD TRABAJADORAS

Si la precariedad laboral es la tónica general, cuando nos adentramos en las condiciones laborales de jóvenes y mujeres el panorama es desastroso para un país que presume de avanzado.

En las últimas tres décadas, la incorporación de la mujer al trabajo fue masiva. Pero al igual que pasa con los jóvenes, las mujeres trabajadoras se han llevado la peor parte del pequeño trozo de pastel que se reparte entre nuestra clase: representan el 62% de los parados y su temporalidad supera en 5 puntos a la masculina. Según un reciente estudio de UGT, en los últimos ocho años el número de asalariadas eventuales ha crecido un 57% (frente al 21% de los hombres) y el 62% de los nuevos contratos temporales netos han ido a parar a mujeres. En el terreno salarial tampoco hay tregua: la media salarial es un 30% menor que la de los hombres. En lo único en lo que “ganan” los trabajadores varones es en accidentes laborales, aunque hay que considerar que muchas trabajadoras del servicio doméstico no tienen contrato y que, por tanto, sus accidentes no se computan.

La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral es aprovechada por la patronal para arrancarle a la clase obrera más plusvalía, a costa de reservar a las mujeres los empleos menos cualificados. Esto no es nada nuevo. Históricamente, las mujeres, los niños y los inmigrantes son utilizados por el capital para obtener mayores beneficios, por un lado por sus peores condiciones laborales y, por otro, porque aumentan el ejército de reserva de parados y, por tanto, la competencia entre trabajadores, lo que provoca que los salarios tiendan a la baja.

De todas las mujeres trabajadoras, las inmigrantes se llevan la palma en cuanto a precariedad. La doble explotación sufrida por las mujeres trabajadoras bajo el sistema capitalista (por la actividad laboral y el trabajo doméstico) se triplica en el caso de las inmigrantes, sobre todo entre las que no tienen papeles: en 2003, su tasa de actividad era tan sólo de un 57% (el 80% para los inmigrantes varones), su paro se situaba en el 20% (el 16% para ellos) y su jornada laboral era un 37% superior a la de una trabajadora española.

Los dirigentes sindicales han utilizado la táctica de firmar ayudas y más ayudas para los empresarios que contraten mano de obra femenina. Pero la realidad, igual que con las ayudas a la contratación indefinida, es que ni hay más contratos indefinidos ni mejoran las condiciones de las trabajadoras. Eso sí, con ese dinero público —es decir, con el dinero de los trabajadores, que somos los que pagamos impuestos—, los empresarios siguen engordando sus plusvalías. Y si las mu-

eres sin hijos tienen problemas para encontrar un trabajo digno, no digamos ya las que son madres. Según un estudio de UGT, mientras que los hombres casados con hijos cobran de media un 7% más que los hombres que no los tienen, las mujeres con hijos tienen un sueldo bruto inferior al de las solteras sin ellos.

La situación es similar entre la juventud. De los cerca de 11 millones de menores de 35 años, unos ocho están insertados en el mercado laboral. Un millón de ellos están en paro, de los que un tercio lleva más de un año buscando empleo. El paro es mayor entre los jóvenes con más formación. Pero el principal problema es la precariedad. En 2004, un total de 2.200.000 jóvenes firmaron la increíble cifra de 7.600.000 contratos temporales. Esta eventualidad se mantiene durante años a través del encadenamiento de contratos. La tasa de eventualidad de los mayores de 30 ó 35 años es cada vez más alta, ya que, como recoge un informe de CCOO, la temporalidad “ha dejado de ser un peaje temporal de acceso a la estabilidad y tiende a extenderse más allá de los primeros años de trabajo”.

En cuanto a los salarios, los menores de 35 años cobran un 65% del salario medio. En el caso de las chicas, la situación es de vergüenza: en 2003, salario medio anual de los chicos fue de 12.779 euros, mientras que el de las chicas fue de 8.489, o sea, 4.000 euros menos. Esto supone, por ejemplo, que mientras un joven hace un esfuerzo salarial para acceder a una vivienda del 43%, una joven lo tenga que hacer del 65%. Con estos datos, es fácil entender por qué en el Estado español sólo un irrisorio 15% de los menores de 30 años viven fuera del hogar familiar.

Los sindicatos tienen el deber de prestar una atención especial a aquellos sectores de la clase obrera más oprimidos. Y las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes sin duda lo son. Prestar mayor atención significa dar la batalla en aquellas empresas donde estos colectivos son importantes, para sindicarlos y hacerlos conscientes de sus derechos; significa negarse a firmar acuerdos en los que cobren menos por realizar el mismo trabajo (doble escala salarial); significa potenciar la movilización juvenil contra la desregulación del mercado laboral; significa que desde las secciones sindicales se luche contra la eventualidad en cada empresa y se anime a las trabajadoras y a los jóvenes a participar, dando



Manifestación de trabajadores inmigrantes en Almería

facilidades para que puedan hacerlo en igualdad con el resto de los trabajadores.

3.12 ¡NATIVA O EXTRANJERA, LA MISMA CLASE OBRERA!

El Estado español ha pasado de ser un país históricamente emigrante (en 1975 había más de 700.000 emigrantes en el extranjero) a multiplicar por diez la población extranjera en los últimos trece años: de 350.000 en 1991 a 3.500.000 en 2005, de las cuales una parte importante no tiene papeles.

Durante los años que estuvo en el gobierno, el PP se dedicó a endurecer las leyes de extranjería, implantando nuevos obstáculos para conseguir papeles. Derechos como el de la reagrupación familiar se dificultaron hasta su casi desaparición. Una campaña pública atroz contra la inmigración criminalizó a estos trabajadores, responsabilizándolos de la inseguridad ciudadana. Mientras la derecha realizaba esa propaganda cínica, permitía a los empresarios aprovecharse de los inmigrantes sin papeles, para minar los salarios y obtener así jugosos beneficios.

Prueba de ello es el Poniente almeriense, donde trabajan decenas de miles de inmigrantes. La campaña agrícola 2003-04 fue la mayor de su historia por volumen de producción, aumentando en un 9% los beneficios con respecto a la anterior. La llamada “huerta de Europa”, el mayor productor de hortalizas del mundo, que si pusiera en línea todos sus invernaderos llegarían de Almería a Berlín, ha enriquecido a agricultores, bancos y distribuidoras. Sólo en El Ejido, donde hay más bancos que bares, en 2001 el volumen crediticio fue de 4.200 millones de euros (700.000 millones de las antiguas pesetas).

Todo esto ha sido posible gracias a los inmigrantes, sobre todo marroquíes. La contribución de estos trabajadores al crecimiento económico ha sido fundamental y se ha hecho a través de una explotación brutal. Las leyes han estado al servicio de esta sobreexplotación, en la medida en que mantenían la existencia de “ilegales”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, “el reconocimiento de los inmigrantes en la contabilidad nacional elevará el PIB alrededor de un 4%”.

A la situación laboral hay que unir las duras condiciones de vida. En el Poniente almeriense, el 80% vive en infraviviendas, en cortijos abandonados o en los mismos invernaderos, como si fueran maquinaria agrícola que se deja en el campo por la noche. Incluso los inmigrantes regularizados no tienen acceso a una vivienda digna, por la cuantía de sus salarios y por los abusos en los alquileres.

Además, en las zonas en las que se concentra la inmigración no hay un aumento de las infraestructuras sociales, educativas, sanitarias, de vivienda pública, etc., lo que está empeorando las condiciones de vida de toda la clase obrera, no sólo de los inmigrantes.

También el idioma se convierte en un obstáculo porque no se invierte en cursos para enseñárselo. Las mujeres, que acceden a puestos de trabajo más aislados y ocultos, pueden pasar años sin aprenderlo, lo que aumenta la marginación. A esto se le añade el recorte continuo en los presupuestos de la enseñanza pública, con lo cual no hay medios para ayudar a todos aquellos estudiantes que necesitan mayor atención, entre ellos los hijos de los inmigrantes recién llegados. Con 450.000 hijos de inmigrantes matriculados en los últimos años, lejos de aumentar el dinero en becas, infraestructuras, mejoras en la educación pública, etc., lo que vemos es un recorte tras otro para beneficiar a la enseñanza privada concertada, fundamentalmente en manos de grupos religiosos católicos y que selecciona a los alumnos en función de su nivel socioeconómico.

La inmigración también está creando problemas de racismo, fomentado por los empresarios, que presentan a los inmigrantes como los culpables del retroceso de las condiciones laborales de todos los trabajadores, para así dividirnos y poder explotarnos a todos más. No olvidemos las terribles escenas vistas en El Ejido en el año 2000, donde hubo escenas que recordaron la caza de negros en el sur de EEUU. A los agricultores más reaccionarios no les bastaba con explotar a los inmigrantes, sino que querían tenerlos discriminados y aterrorizados, para que no se organizaran ni lucharan por sus derechos.

Mientras gobernó el PP, no se movió un solo dedo para esclarecer estos hechos. Pero con el PSOE no

está habiendo grandes diferencias. La última campaña de regularización estuvo motivada por la necesidad de aumentar los ingresos de Hacienda y la Seguridad Social. Su posición respecto a la represión y expulsión de los inmigrantes subsaharianos al desierto, y su complicidad con el gobierno de Marruecos son muy significativas. En el próximo período, en la medida en que tanto las condiciones de vida de los inmigrantes como el crecimiento económico empeoren, podemos encontrarnos en algunas zonas con situaciones explosivas similares a las de El Ejido.

Las leyes no detendrán el fenómeno de la inmigración ilegal ni los abusos empresariales. **Como internacionalistas, defendemos que ningún ser humano es ilegal; por tanto, todos los trabajadores inmigrantes deben ser regularizados sin excusas.** La posición del PSOE y la de los dirigentes sindicales es muy peligrosa para el futuro. La propaganda de la derecha tuvo cierto calado entre algunos sectores de la población más atrasados, en la medida que no encontró una respuesta por parte de las organizaciones obreras. Como mucho, las direcciones sindicales se opusieron tíbilmente a las leyes de extranjería del PP, cuando con movilizaciones potentes se hubieran parado, como pasó con el *decretazo*. Los reformistas, en lugar de proteger a los inmigrantes de las garras de las mafias (muchas son empresas importantes del país de origen o de destino) y organizarlos sindicalmente para que luchen por sus derechos, consienten las actuales leyes de inmigración.

Un sector tan explotado como el de los trabajadores inmigrantes tarde o temprano se pondrá en marcha con luchas tremendas. Son una parte poderosa del movimiento obrero y es absolutamente necesario vincularlos a la lucha de la clase obrera del Estado español. La actitud asistencial y caritativa de los sindicatos con los inmigrantes, más propia de una ONG, es un reflejo de la ausencia de una política consecuente en este terreno. Los trabajadores inmigrantes y no inmigrantes somos la misma clase obrera en los centros de trabajo. Son nuestros hermanos de clase, que han llegado a nuestro país empujados por la miseria a la que les somete el capitalismo en sus países, especialmente por el rosario de guerras civiles que sufre el África negra, fomentadas y financiadas por las grandes empresas occidentales. Tenemos la obligación sindical y política de unir a todos los trabajadores por encima de cualquier diferencia, integrándolos en el ejército de la clase obrera para luchar, hombro con hombro, con sus hermanos europeos en defensa de los intereses de los trabajadores, que son los mismos en todo el mundo. Este es el auténtico internacionalismo.

4. Por un sindicalismo combativo, de clase y democrático

Si exceptuamos el 20-J, la línea seguida por los dirigentes oficialistas de CCOO ha constituido la vanguardia de la estrategia de desmovilización y pactos con la patronal y el gobierno, de la que obviamente también ha sido partícipe la dirección de UGT. No obstante, sería falso decir que la derechización de CCOO se ha producido sin coste para el sector encabezado por Fidalgo.

4.1 EL SECTOR CRÍTICO DE CCOO

El VIII Congreso de CCOO (abril de 2004) reeligió a Fidalgo como secretario general, pero con 15 puntos menos de respaldo que en el congreso anterior, celebrado cuatro años antes. Consiguió el apoyo del 59% de los delegados, mientras un 23% respaldó la candidatura del sector crítico a la ejecutiva confederal y un 18%, la del sector de Rodolfo Benito. La escisión de este último sector, antes integrado en los oficialistas, fue sintomática de las crecientes dificultades de Fidalgo para mantenerse firme en el timón del sindicato. Además, no podemos olvidar el sinfín de manipulaciones burocráticas en el proceso congresual, que obviamente favorecieron a los oficialistas.

Es obligado detenerse en analizar las perspectivas para el sector crítico de CCOO, encabezado por dirigentes históricos como Agustín Moreno y Salce Elvira. Surgido hace una década, en el marco del proceso del VI Congreso Confederal (enero de 1996), e impulsado fundamentalmente por militantes del PCE con posiciones en el aparato de CCOO, el sector crítico fue una reacción a los sucesivos giros derechistas impuestos por Antonio Gutiérrez, secretario general en el período 1987- 2000.

La respuesta del aparato burocrático fue la represión más salvaje. En poco más de un año hubo cerca de mil sanciones a dirigentes y cuadros críticos (expulsiones, suspensiones de militancia, disolución de órganos), sin hablar de los afiliados que abandonaron el sindicato. Los dirigentes derechistas pensaban que así lograrían descabezar esta corriente, pero se equivocaron. A pesar de sus vaivenes y zigzags, el sector crítico refleja el descontento de numerosos sindicalistas con la línea posibilista y desmovilizadora de la dirección de CCOO, y con la ausencia de democracia interna a la hora de adoptar decisiones fundamentales.

Los marxistas de CCOO participamos activamente en el sector crítico desde su mismo inicio, con el objetivo de dotarlo de una perspectiva socialista y un contenido clasista, contribuyendo a construirlo en todas las ramas y territorios donde tenemos influencia. La existencia del sector crítico de CCOO es, sin duda, muy positiva, pero estos diez años también han puesto en evidencia sus carencias, derivadas de la falta de un programa revolucionario que llene de contenido su acción sindical.

Después de una etapa negra de represión y enfrentamiento impulsada por la mayoría oficialista, entre una parte de los críticos se abrió paso la idea de la “normalización” interna del sindicato. Obviamente, los oficialistas vieron la oportunidad de integrar a los dirigentes críticos más “sensatos” y fragmentar la



oposición. Bajo el sugerente envoltorio de la “normalización” se viene desarrollando una campaña —apoyada por la mayoría de los dirigentes del PCE y de IU— que ha conseguido en parte su objetivo: debilitar al sector crítico e introducir la frustración entre miles de cuadros, delegados y afiliados que vieron con ilusión el nacimiento de esta oposición. Esta situación de parálisis del sector crítico se hizo evidente en el congreso del año pasado, justo cuando la mayoría se había hecho añicos tras la destitución de Rodolfo Benito como secretario de Organización confederal. En diversos procesos precongresuales se produjeron alianzas entre críticos y *rodolfistas*, con el objetivo de desplazar a los oficialistas, pero también hubo casos de alianzas entre éstos y críticos. Lamentablemente, en

muchas organizaciones del sindicato donde los críticos participan en la dirección junto a los rodolfistas la línea sindical no ofrece diferencias sustanciales con la practicada por los oficialistas.

Una amplia capa de dirigentes críticos sigue contribuyendo a generar falsas esperanzas, resumidas en la estrategia de la “normalización”. Si se parte de la premisa de que solamente ocupando cargos de dirección se puede cambiar el rumbo del sindicato, es inevitable llegar a acuerdos con quien tenga la mayoría, acuerdos que no sólo diluyen el contenido más progresista del sector crítico, sino que, y es lo más grave, confunden a miles de sindicalistas honestos y combativos de CCOO. Así, tras el VIII Congreso, el sector crítico ha flexibilizado tanto su táctica para ganar posiciones dentro del aparato, que muchos afiliados son incapaces de distinguir ya sus señas de identidad. Por ello no es de extrañar que esté sufriendo en la actualidad una profunda crisis de identidad que le impide conectar con amplios colectivos de trabajadores, cada vez más descontentos con la dirección actual. Es más, esa actitud está generando unas dudas cada vez mayores sobre la capacidad del sector crítico para dirigir de otra forma el sindicato. Esto se ve claramente en sitios en que es mayoritario, donde su acción sindical cotidiana no difiere significativamente de la llevada a cabo por la mayoría.

¿A qué se deben las vacilaciones del sector crítico? La pregunta es interesante y al mismo tiempo compleja. En primer lugar, es evidente que el sector crítico ocupa un espacio a la izquierda, espacio que existe tanto en el panorama sindical como dentro de CCOO. La necesidad de cubrir ese hueco, que por la derechización de los oficialistas y la situación general tiende a agrandarse, prevalece sobre sus errores y sobre las presiones tendentes a la autodisolución que existen en su seno. Por otro lado, es difícil explicar su falta de audacia y determinación por el ambiente entre los trabajadores, puesto que éstos vienen demostrando una y otra vez su voluntad de lucha (Síntel fue el ejemplo más sobresaliente). Más bien esa falta de determinación hunde sus raíces en la ausencia de una política de clase consecuente, una acción sindical entendida como parte de la lucha por el socialismo, orientada directamente a los trabajadores en las fábricas y basada en la movilización de la clase obrera, y no en maniobras y “practicismos” que sólo sirven para justificar la falta de respuesta sindical. En una situación de gran polarización social, la adopción de una política sindical más a la izquierda no sólo tendría un eco notable entre los trabajadores, sino que rápidamente exigiría trazar unas perspectivas y un programa político que sustentase esa acción sindical

más combativa. Obviamente, en un contexto como el actual, en que en el ambiente social existen muchos elementos de deslegitimación del sistema, aunque confusos y poco desarrollados, esas perspectivas y ese programa deben basarse necesariamente en el cuestionamiento del sistema capitalista.

Los reformistas de derechas son mucho más consecuentes que los reformistas de izquierdas. Los primeros actúan de forma mucho más segura porque sienten que su política está en sintonía con la lógica del sistema y con la ideología dominante. Los reformistas de izquierdas, al no desembarazarse consecuentemente de esta lógica, están siempre temerosos de sus propios pasos y de los efectos que éstos puedan desatar en el movimiento obrero. Se distancian un poco de los reformistas de derechas, pero sin perder nunca de vista la posición que han abandonado, por si acaso tienen que volver a ella.

La defensa de los intereses de los trabajadores exige que CCOO aplique otro modelo sindical. El camino para conseguirlo no pasa por los arreglos en el aparato o los acuerdos entre sectores, sino por que el sector crítico vaya a los trabajadores, se dirija a ellos directamente, impulse las luchas desde una perspectiva de clase —unificando los conflictos, fomentando la solidaridad, basándose en la democracia de las asambleas— y le dé a la acción sindical una perspectiva socialista. El futuro del sector crítico de CCOO depende de cómo responda a este reto.

4.2 EL MARXISMO Y LA LUCHA POR REFORMAS

Durante décadas, los reformistas han acusado a los marxistas de despreciar la lucha por reformas favorables a la clase obrera. Esto es una mentira consciente con el fin de hacernos aparecer como lunáticos y sectarios despreocupados de los problemas cotidianos de los trabajadores. La diferencia entre los reformistas y los marxistas no es que nosotros rechacemos las reformas. Todo lo contrario, somos los luchadores más consecuentes por las reformas, pero damos a esas luchas un contenido de clase y socialista, a diferencia de ellos, que ven las reformas como un fin en sí mismo.

Para los marxistas, las luchas cotidianas por reformas son imprescindibles para unir y movilizar al conjunto de los trabajadores, no sólo a los sectores más conscientes y avanzados de la misma, sino precisamente a los más atrasados y pasivos. La lucha por reformas sirve para que los trabajadores aprendan a través de su propia experiencia, para que se den cuenta de que si nos organizamos y luchamos unidos

como clase somos fuertes, para que ganen confianza en sus propias fuerzas y para que comprendan que el funcionamiento de todo el sistema capitalista descansa sobre los hombros de nuestra clase. En definitiva, la lucha por reformas es imprescindible para que los trabajadores eleven su nivel de conciencia porque todo avance, por pequeño que sea, encierra lecciones e influye positivamente en su dignidad, haciéndoles sentir que son algo más que meras máquinas humanas al servicio de un patrón, para elevarlos a la categoría de hombres y mujeres que piensan y actúan por sí mismos.

Además de ser los luchadores más consecuentes, los marxistas también explicamos que lo que el capitalismo, producto de nuestra lucha, nos tiene que dar hoy con una mano, mañana nos lo intentará quitar con la otra, que toda conquista es temporal cuando eventualmente cambia la correlación de fuerzas entre las clases, y que la única manera de convertir en permanentes nuestras conquistas y seguir avanzando es acabar con el capitalismo y sustituirlo por una sociedad socialista. La evolución del Estado de Bienestar —hoy en proceso de desmantelamiento, pero que durante toda una época histórica pareció tan asentado que daba la impresión de haber existido toda la vida, de ser algo “natural”— es la mejor prueba de esto.

Es verdad que, en épocas de “auge” económico, cuando sus beneficios crecen a espuestas, los capitalistas se pueden permitir conceder algunas migajas a los trabajadores, migajas que nunca son gratuitas y que sólo se obtienen a través de la lucha, trabajando duro, echando horas extras, arruinando la salud y sacrificando la vida familiar y el ocio.

Pero, ¿qué ocurre cuando cambia el ciclo económico, los negocios van mal y los capitalistas muestran más resistencia a las demandas obreras? Al haber renunciado a toda perspectiva de transformación social, los dirigentes reformistas de los sindicatos empiezan por abandonar la lucha por nuevas reivindicaciones. La falta de iniciativa del movimiento sindical provoca que la burguesía pase abiertamente al ataque, lo que conduce a que los reformistas se resignen y aspiren simplemente a intentar mantener lo que hay. Pero jugar a defender es la mejor fórmula para perder, y los retrocesos acaban por llevar a que sectores de los aparatos sindicales interioricen la derrota y adopten como único programa el pactar los recortes, la política “realista” del mal menor, bajo la que aceptan todo tipo de medidas: destrucciones masivas de empleos fijos, procesos generalizados de subcontratación, privatizaciones, moderación salarial, etc.



Un sindicalista no debe contemplar su actividad diaria con las gafas de la rutina cotidiana, que conlleva mezquindad y estrechez de miras. El trabajo sindical, por su propia dinámica, implica muchos peligros de oportunismo, conciliación y adaptación a los argumentos de nuestros enemigos de clase. Si un sindicalista considera su actividad como un fin en sí misma y no comprende el proceso de toma de conciencia de los trabajadores, tenderá a sacar conclusiones muy negativas: falta de confianza en la capacidad de lucha de la clase, tendencia a sustituir a los propios trabajadores convenciéndose así mismo de su habilidad como negociador y de sus conocimientos, etc. De esta manera, acaba por escapar al control de sus compañeros y va cambiando sus puntos de vista, adaptándose al “realismo” empresarial y dando lugar a la formación de una capa burocrática en los sindicatos de clase, bien sean viejos luchadores desmoralizados o arribistas que buscan privilegios.

Esto repercute sobre la vida interna de los sindicatos. Para consumir la derechización, se persigue a los que no la aceptan. Así, el principal criterio para acceder a un cargo deja de ser la capacidad y el apoyo de los trabajadores. Se trata de que lleguen personas que no les creen problemas a los jefes sindicales. La capacidad es lo de menos porque cada vez más las cosas se resuelven entre cuatro en un despacho, ya sea del ministro o del director de la empresa. Además, la participación de las bases se vuelve un estorbo, puesto que maniobrar y pactar a espaldas de los trabajadores es incompatible con un régimen democrático. Los afiliados se ven reducidos a meros destinatarios de los servicios del sindicato (formación, seguros, viviendas, etc.). Por tanto, la defensa de la democracia interna en los sindicatos también está íntimamente vinculada a la lucha por una política sindical genuinamente socialista.

El aceptar el capitalismo como el único sistema posible conduce inevitablemente, primero, a abandonar la lucha por las reformas; después, a justificar las contrarreformas antiobreras; y, más tarde, a la burocratización del sindicato y la exclusión de los discrepantes. Es decir, convierte a los dirigentes sindicales reformistas en los lugartenientes de los capitalistas en el seno del movimiento obrero. ¿Acaso no ha sido ésta la realidad de los últimos años en todo el mundo, y en nuestro país en particular?

4.3 SINDICALISMO Y POLÍTICA

Toda esta situación implica la desorganización y desmoralización de los trabajadores más combativos (precisamente el sector de obreros en el que una dirección sindical debe apoyarse para impulsar hacia delante al conjunto de la clase, ya sea a nivel de todo un país o dentro de una fábrica), desorganización y desmoralización que refuerzan el proceso.

En esas circunstancias, la ofensiva ideológica de la burguesía hizo mella en las cabezas de muchos dirigentes: asumieron que la dependencia económica de las subvenciones del Estado no suponía ningún peligro para los sindicatos, que la lucha obrera no servía y había que apostar por el sindicalismo de servicios, que la lucha de clases era una reliquia del pasado. Y el reflejo más dañino de la influencia ideológica burguesa: empezaron a teorizar sobre la necesidad de despolitizar los sindicatos, de reducir los sindicatos a una especie de asociaciones profesionales, como si a los trabajadores no nos debiese importar el color del gobierno porque, total, ya no hay derecha ni izquierda, como proclama el *pensamiento único*.

Nada más lejos de la realidad. Izquierda y derecha siguen existiendo y seguirán existiendo mientras exista la lucha de clases. Y precisamente una de las diferencias entre ambas es que las organizaciones de izquierda nunca ocultan sus señas de identidad, mientras que las de derechas siempre se presentan como “apolíticas” o “independientes” (aunque al final se les acaba por ver el plumero, como ocurre con la USO o con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que actúan como brazos armados de la Iglesia y el PP).

Para justificar la neutralidad política, los reformistas se encubren con la máscara de la “independencia”. Un sindicato debe ser independiente, nos dicen. Estamos totalmente de acuerdo, **los sindicatos deben ser independientes, pero en primer lugar deben ser independientes del enemigo de clase: los empresarios y el Estado burgués**. Otra de las grandes diferencias ideológicas entre derecha e izquierda es que la iz-

quierda siempre dijo que **todo es política, es imposible ser apolítico**. Por tanto, puesto que es inevitable que la acción sindical tenga efectos políticos (se quiera o no, se sepa o no), lo lógico es decidir conscientemente cuáles van a ser esos efectos, a fin de no beneficiar a la burguesía. Por eso los sindicatos necesitan tener su propia perspectiva política de clase, perspectiva que sólo la puede garantizar una dirección sindical marxista plenamente consciente de todas las implicaciones de su actuación y que es doblemente necesaria en períodos de crisis del sistema, en los que los sindicatos no deben limitarse a lamentar la realidad del capitalismo, sino contribuir a su superación. Por tanto, **la idea de la independencia política de los sindicatos es un reflejo de la influencia ideológica burguesa en el movimiento obrero**. La derecha sabe que no les puede pedir abiertamente a los dirigentes sindicales que la ayuden, así que intenta que sean neutrales y que, al menos, no ayuden a la izquierda.

Nuestra concepción no tiene nada que ver con el sindicato como “correa de transmisión”. Los marxistas defendemos la independencia de los sindicatos, pero por independencia no entendemos una supuesta neutralidad política, sino que las decisiones se tomen entre todos y en el propio sindicato. El papel de la vanguardia política no es sustituir al sindicato ni a los trabajadores, sino aportar a los debates las ideas del marxismo, influir sobre las decisiones sindicales mediante el convencimiento con datos, cifras y argumentos.

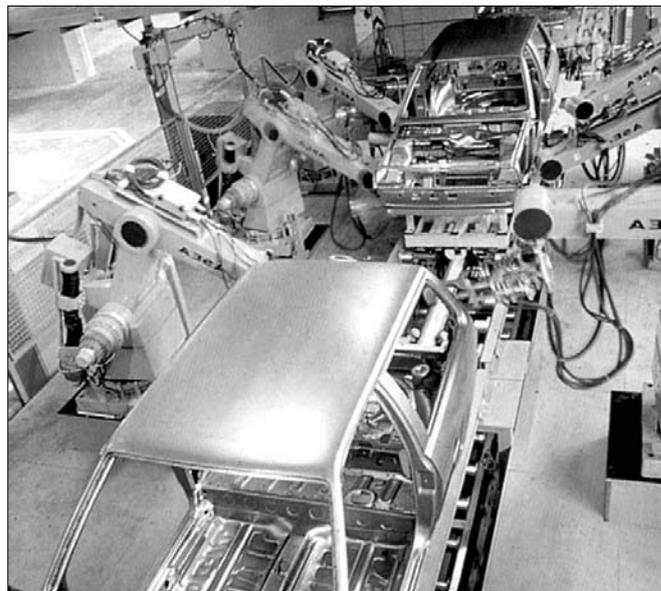
4.4 LA FUERZA DE LA CLASE OBRERA HOY

Los capitalistas y sus plumíferos han construido todo un mito sobre la naturaleza de la clase obrera, volviendo del revés los auténticos procesos que se dan en el capitalismo.

Así, machacan una y otra vez la falacia de que la clase obrera se ha debilitado, que la composición de los trabajadores es hoy más “compleja” que hace treinta años y que los intereses de las diferentes capas de asalariados, lejos de converger, divergen cada vez más.

Esta gente identifica de manera arbitraria e interesada clase obrera con clase obrera industrial, sin comprender que, lejos de debilitarse, la clase obrera se ha fortalecido enormemente, atrayendo a sectores que hace décadas no poseían tradiciones sindicales, no se encontraban entre los trabajadores asalariados o, simplemente, no existían.

Aunque el trabajo asalariado y la producción de mercancías han existido en todas las sociedades hu-



manas desde el sistema esclavista, antes del capitalismo sólo tenían un carácter marginal, complementario a los métodos de trabajo y producción de dichas sociedades, basados en el pequeño productor aislado. Sólo con el capitalismo se convirtieron en dominantes.

En la economía capitalista, todo invento provoca una nueva división del trabajo, dando lugar al nacimiento de nuevos sectores productivos y nuevos destacamentos de trabajadores asalariados. El ferrocarril, el automóvil, la electricidad, los hidrocarburos, el plástico o las tecnologías de la información han creado nuevas ramas industriales y nuevas capas de obreros. Cada época del capitalismo crea su *nueva economía* y una nueva división del trabajo.

Sectores que originariamente pertenecían a las clases medias, al artesanado o a la economía familiar, no pueden resistir las tendencias que impone el desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo, y se ven obligados a encuadrarse en el sistema de trabajo asalariado: la enseñanza, la hostelería, los grandes hospitales con su legión de celadores, personal de mantenimiento, auxiliares, enfermeros, incluso los médicos de la sanidad pública; la carpintería, la alimentación, y así podríamos continuar hasta el infinito.

Ya hemos explicado que en todos estos sectores son las propias condiciones de trabajo las que necesariamente crean las premisas para que se desarrolle la conciencia de clase. Esto se demuestra, además, en la propia organización de los trabajadores. En todos los países, los grandes sindicatos de clase son el referente para la inmensa mayoría de los trabajadores, a pesar de la disparidad de oficios o condiciones laborales. UGT y CCOO suman en torno al 80% de la representación sindical en las empresas, mientras que los sindicatos corporativos o independientes, carentes de

contenido de clase, sólo han arraigado en sectores muy determinados y minoritarios (funcionarios, sanidad, maquinistas de tren, pilotos de líneas aéreas), y esto debido, en algunos casos, a la nefasta actuación de los dirigentes de los sindicatos de clase.

Los métodos de lucha son los mismos en todos los sectores de la clase obrera, y se caracterizan por las acciones de masas: huelgas, manifestaciones, ocupación de los centros de trabajo, etc. La influencia y la fuerza aplastante de la clase obrera en la sociedad capitalista se demuestra en el hecho de que sectores no obreros (estudiantes, pequeños propietarios agrícolas, transportistas, comerciantes...) tienden a adoptar sus métodos de lucha y denominan sus acciones con una palabra de inequívoco sabor proletario: huelga.

Uno de los argumentos favoritos y “novedosos” de los detractores del marxismo, que curiosamente encuentra eco en algunos sectores de la izquierda y, por supuesto, en las cúpulas sindicales, es que la ofensiva del capitalismo contra las condiciones de vida y trabajo de nuestra clase es un obstáculo para que la juventud obrera pueda desarrollar una conciencia de clase similar a la de los trabajadores ocupados en los sectores clásicos de la economía.

Este análisis, en realidad, se vuelve completamente contra ellos. El sistema capitalista sólo puede conjurar temporalmente la lucha de clases si, en lugar de aumentar las contradicciones entre trabajadores y empresarios, las amortigua y suaviza. La única manera de lograr esto es mejorando las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, en la perspectiva de que los hijos vayan a tener una vida más fácil que los padres, creando así ilusiones y confianza en el capitalismo. Esto fue lo que vimos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Resulta cuando menos incomprensible que se pueda pensar en un relajamiento futuro de la lucha de clases precisamente cuando el capitalismo, lejos de amortiguar las contradicciones, las está exacerbando. Las nuevas condiciones de trabajo (precariedad, sobreexplotación, incertidumbre ante el futuro) agudizan la lucha de clases, como ya se está poniendo de manifiesto y se pondrá mucho más cuando cambie el ciclo de la economía capitalista. Los sectores más explotados de la clase obrera, que hoy aprietan los dientes en espera de un futuro mejor, pero que saldrán muy mal parados de una futura recesión económica, jugarán un papel decisivo en las luchas que inevitablemente tendrán lugar.

Lo que los críticos del marxismo olvidan es que las condiciones de vida y trabajo que ellos reclaman con nostalgia, el famoso Estado del Bienestar, sólo tiene una historia de cuarenta o cincuenta años. ¿Cuáles eran las condiciones sociales de la clase obrera en Europa y EEUU en los años treinta del siglo XX, por no hablar de las del siglo XIX? ¿No crecieron en esa época los sindicatos entre una clase obrera sin convenios colectivos y afectada por una precariedad extrema? Existen muchas similitudes entre las condiciones de aquel período y las que se están creando actualmente entre amplios sectores, fundamentalmente de la juventud. ¿Y acaso aquellas condiciones no fueron las que dieron lugar a los movimientos revolucionarios más importantes de la historia del capitalismo? ¿En qué quedamos, entonces? ¿Se amortigua o se agudiza la lucha de clases?

Es cierto que la generalización del trabajo a tiempo parcial y de todo tipo de flexibilidad laboral mantiene viva la sensación de inseguridad y ejerce un efecto deprimente sobre la militancia y la organización sindical, hasta ahora. Por otro lado, los cambios en la fuerza de trabajo han significado pérdidas de empleos en la vieja industria pesada (siderurgia, bienes de equipo, astilleros...), que anteriormente era el bastión de los sindicatos. La capa de viejos activistas sindicales ha sido duramente golpeada y está descorazonada. Miran hacia atrás y, al carecer de la capacidad de los marxistas para tener una visión más amplia sobre las perspectivas futuras y comprender la naturaleza de la tormenta que se está acumulando, sólo ven derrotas. Y mientras que los activistas más veteranos están desorientados, las nuevas capas de jóvenes trabajadores carecen de experiencia y todavía no encontraron su sitio. Son los que sufren la peor explotación, tienen una reserva inagotable de energía y de espíritu combativo, y jugarán un papel clave en las luchas futuras porque la vida les enseñará la necesidad de organizarse y participar, lo que harán sin el lastre

de prejuicios que arrastran los veteranos. En estos jóvenes trabajadores se cimentará el sindicalismo revolucionario.

4.5 EL TRABAJO DE LOS MARXISTAS EN LOS SINDICATOS DE MASAS

En muchas ocasiones, los marxistas hemos sido acusados por los dirigentes reformistas de CCOO y UGT de ser “poco realistas”, “poco prácticos”, de hablar mucho de socialismo pero abstenernos de luchar por el día a día en las empresas. Esta forma distorsionada y mentirosa de presentar el sindicalismo marxista intenta esconder la propia impotencia de los dirigentes sindicales, que con su “realismo” han ido cediendo palmo a palmo conquistas históricas de la clase obrera. Toda la experiencia de las últimas décadas pone en evidencia la política pragmática de los líderes sindicales. Su visión de la acción sindical se reduce al diálogo con los “empresarios”, como se llama ahora a los empresarios en la jerga burguesa. Creen que es posible persuadir a los capitalistas de que lo que es bueno para los trabajadores también es bueno para las empresas. Los capitalistas, ante tales razonamientos, que demuestran una absoluta bancarrota ideológica y una total falta de capacidad movilizadora, se han envalentonado. De esta manera, la contrarrevolución en los centros de trabajo se ha hecho realidad gracias a la colaboración inestimable de este sindicalismo realista que ha aceptado las reglas del juego del capitalismo. Los hechos son tozudos. Los años dorados del sindicalismo de moqueta y acuerdo relativamente fácil, típicos de las épocas de auge económico, han pasado a mejor vida. Cualquier avance, cualquier conquista que el movimiento obrero quiera alcanzar, será producto de la lucha más enérgica y decidida.

En coyunturas como la actual, es fundamental tener muy claro que los sindicatos de clase son organizaciones valiosas cuya construcción llevó décadas e ingentes sacrificios, que tienen hondas tradiciones entre los trabajadores y que no van a desaparecer de la escena por muy a la derecha que en ciertos períodos se deslicen sus dirigentes. Por tanto, para los revolucionarios siempre es una obligación participar en los sindicatos de masas y defender en su seno el programa más avanzado, las consignas más resueltas y los métodos de lucha más consecuentes, para asegurar la victoria en cada lucha.

Dotar a la clase obrera de una dirección marxista no se va a conseguir, como creen algunos sectarios, a través de la denuncia altisonante de los dirigentes



Cartel de EL MILITANTE previo al 20-J

reformistas, ni mucho menos a través de la autoproclamación o el ultimátum a los trabajadores. Los sindicatos de masas son parte de la propia clase obrera, de su historia, de sus luchas más heroicas, de la clandestinidad, de la represión... En muchos casos constituyen la experiencia viva de la clase, aunque ésta se encuentre durante un tiempo sepultada por la herumbra burocrática.

Por eso los sindicatos de masas siempre acaban por reflejar en su seno los vaivenes de la lucha de clases, especialmente el proceso de diferenciación entre el ala revolucionaria y el ala más conservadora y pactista del movimiento obrero. En las épocas de decadencia imperialista, los aparatos sindicales tienden a fusionarse con el Estado burgués, constituyendo un sólido punto de apoyo para la clase dominante. Pero eso ocurre en la cúspide; en la base, la situación es muy distinta. En los períodos de agudización de la lucha de clases, los sindicatos se ven afectados por la radicalización de las masas, empezando por las capas de jóvenes trabajadores.

El papel de los marxistas en los sindicatos es precisamente el de preparar las fuerzas para intervenir en esos períodos convulsos, con el objetivo de anular la influencia narcótica de las ideas reformistas y ga-

nar a la mayoría de la clase obrera para el programa de la revolución socialista. Marx, Engels, Lenin o Trotsky insistieron una y mil veces en la necesidad de crear una sólida base de sindicalistas marxistas en los sindicatos obreros de masas. Nunca defendieron las escisiones sindicales, ni la estrategia de construir "sindicatos rojos", inmaculados pero aislados e impotentes. Lenin explicó, en polémicas muy duras contra los que abogaban por la salida de los sindicatos de masas, que ése es el mejor servicio que se pueda prestar a los dirigentes reformistas para que mantengan el control de los sindicatos. Tanta importancia tenía para Lenin esto, que abogó incluso por el trabajo en los sindicatos de masas aunque fuesen reaccionarios, cuestión a la que dedicó uno de los capítulos de su importante obra *El 'izquierdismo', enfermedad infantil del comunismo*.

Renunciar a un trabajo revolucionario sistemático dentro de los sindicatos de masas equivale, en última instancia, a renunciar a la revolución socialista, pues ésta no es posible sin ganar el apoyo consciente de la mayoría de la clase obrera. Y ganar ese apoyo es imposible sin que los trabajadores comprueben, a través de su propia experiencia, la utilidad de las ideas y los métodos del marxismo para la defensa de sus intereses inmediatos, que precisamente es la tarea de los sindicatos.

La historia del movimiento sindical en el Estado español confirma esta tesis. El trabajo de miles de cuadros obreros del PCE dentro del sindicato vertical franquista, combinado con la formación de comisiones obreras para representar directamente a los trabajadores durante los conflictos colectivos, jugó un papel decisivo en la lucha por las mejoras salariales y laborales y, por supuesto, en el impulso de la lucha contra la dictadura. Si esto fue así, con más razón es absolutamente necesario que los marxistas construyan una base de masas en CCOO y UGT.

Es cierto que la defensa de un programa revolucionario en los sindicatos conduce, en no pocas ocasiones, a ser víctima de ataques despiadados por parte del aparato, a ser sancionado o expulsado, a sufrir incluso el despido con la connivencia de ciertos dirigentes, que de esta manera se deshacen de un "estorbo". Es el precio a pagar por la coherencia y por una política consecuente en defensa de los intereses de los trabajadores. Pero la burocracia sindical no puede expulsar a miles, y siempre existe la forma de continuar con un trabajo sindical revolucionario. La experiencia de la clase hará el resto, pues por cada posición sindical que un revolucionario conquiste sólidamente habrá decenas y centenares de trabajadores dispuestos a defenderle de la arbitrariedad burocrática.

Esto obviamente no excluye que, cuando la burocracia logra imponerse y expulsa a cuadros sindicales revolucionarios que poseen una influencia de masas real, no sea necesario reagrupar esas fuerzas, para mantener las posiciones conquistadas. Pero este hecho, motivado por las exigencias del momento, no significa hacer campaña permanentemente a favor de la escisión sindical y la formación de nuevos sindicatos “rojos”. Todo lo contrario, estos reagrupamientos son necesariamente temporales y deben orientarse firmemente hacia el establecimiento de vínculos con la base de los sindicatos de masas, en la perspectiva de reingresar cuando se refleje en ellos una nueva etapa de la lucha de clases más favorable para el marxismo. La razón de su temporalidad es que no toda organización de trabajadores es un sindicato. Un sindicato tiene que ser una organización de masas, que una a todos los trabajadores por encima de cualquier diferencia y capaz de paralizar el país con una huelga general, como en el 20-J. En este sentido, los sindicatos sectoriales o de ámbito autonómico tienen graves limitaciones porque las cuestiones decisivas (legislación laboral, pensiones, protección de los parados, etc.) son las que afectan a toda la clase y, por

comprensible hacia el aparato burocrático. Pero esto no justifica los planteamientos sectarios, que aíslan a los mejores luchadores del conjunto de la clase. “El ultraizquierdismo es la penitencia que paga la clase obrera por los pecados reformistas de sus dirigentes”, solía decir Lenin. A pesar de todos los ataques y de todas las calumnias, los marxistas nos mantenemos firmes en nuestra participación dentro de los sindicatos de masas porque confiamos en nuestro programa y en la capacidad de la clase obrera para, a través de su experiencia y nuestra intervención política, cambiar el mundo.

4.6 NUESTRO MODELO SINDICAL

Ningún trabajador puede dudar de la utilidad de una herramienta. Pero incluso la mejor de las herramientas, mal manejada, puede causar un gran estropicio. Con los sindicatos pasa exactamente igual. Son una herramienta imprescindible para la lucha de los trabajadores y no debe haber ninguna duda de que sin ellos estaríamos muchísimo peor, pero los resultados prácticos de su actividad dependen de cómo estén dirigidos. Y desde nuestro punto de vista como marxistas, es evidente que actualmente están muy mal dirigidos.

Los actuales dirigentes sindicales no creen posible evitar los ataques que sufrimos; en el mejor de los casos, su máxima aspiración es suavizarlos. Dan por buenos los argumentos de la patronal, están resignados. Pero precisamente **si el movimiento obrero avanzó históricamente fue por no resignarse, por no aceptar que las cosas tengan que ser como son en un momento dado.**

Estos años de pactos y consensos generaron una acomodación y una inercia sindical que objetivamente debilitó al movimiento obrero. Pero los problemas de los trabajadores no pueden resolverse mediante charlas en los despachos. La actual

situación del capitalismo no deja margen para el diálogo social; es hora de luchar. Y la lucha requiere dirigentes sindicales firmes y capaces de organizar a los trabajadores para la batalla. Ya no será suficiente para un sindicalista con que el jefe de su sindicato le dé el “visto bueno”, y mucho menos con que sea reconocido como interlocutor por los empresarios o el Estado. Su única autoridad será la autoridad política y moral ante los trabajadores. Y esto hay que ganárselo, no lo puede otorgar nadie.



Asamblea de trabajadores

tanto, no se pueden dilucidar en el día a día de las empresas, ni en los convenios, ni en un sector o una autonomía determinados. Por ello, estas organizaciones sindicales de ámbito sectorial o territorial restringido no constituyen una alternativa real a los sindicatos de masas intersectoriales y estatales, por muy reformistas que sean éstos y por muy combativas que sean aquéllas.

Es cierto que el pactismo y la falta de democracia interna generan entre los mejores activistas un odio

El modelo sindical que defendemos los marxistas parte de la premisa de que **a los trabajadores nunca nos regalaron nada, todos los avances se consiguen con la organización y la lucha**. Y la lucha exige como primer requisito el estar organizados. Como dijo Marx, “sin organización, la clase obrera sólo es materia prima de explotación”. Un movimiento obrero fuerte, es decir, un movimiento obrero consciente y organizado, es la única garantía para el avance económico, social y laboral de la clase obrera; el debilitamiento del movimiento sindical siempre implica retrocesos para los trabajadores. Por tanto, **el principal criterio que debe guiar la acción sindical es la preservación de la confianza en las alternativas colectivas y en nuestras propias fuerzas**.

Propugnamos, por tanto, un sindicalismo combativo, de clase y democrático. Un sindicalismo que defienda intransigentemente los intereses generales de la clase obrera, que unifique y extienda las luchas para así hacer más presión, que considere que la negociación sólo tiene sentido cuando se apoya en la movilización, que fomente la participación de los trabajadores en la toma de decisiones a través de las asambleas, que acabe con la dependencia económica del Estado y que favorezca la unidad de acción sindical. En definitiva, un sindicalismo que eleve el nivel de conciencia, organización y lucha de los trabajadores (y no que contribuya a desorganizarlos, atomizarlos y desmoralizarlos, que es la consecuencia del reformismo de los actuales dirigentes).

Bajo un modelo reformista, el sindicato pierde la perspectiva de clase, se desnaturaliza y acaba convertido en una gestoría laboral. Es como un cuchillo sin filo; no deja de ser un cuchillo, pero sirve para poco. La solución no es tirar el cuchillo a la basura, sino afilarlo para que pueda volver a cumplir con su función.

La alternativa para que el movimiento sindical salga de su actual marasmo no es crear nuevos sindicatos, sino construir dentro de ellos una fuerte corriente marxista que los dote de una nueva dirección política, una dirección dispuesta a superar todos los obstáculos que se le pongan delante, a enfrentarse con el capital, con ganas de trabajar y en permanente contacto con los trabajadores; una dirección que sea la vanguardia combativa de los trabajadores, que anime a responder a todos los ataques y que organice esa respuesta, y que forje la unidad de clase de todos los trabajadores por encima de cualquier división, impulsando los comités de empresa como órganos de representación unitaria; una dirección que ponga las decisiones en manos de las asambleas.

Y, sobre todo, una dirección que piense de manera independiente, que piense exclusivamente desde

el punto de vista de la clase obrera y con las ideas claras, es decir, una dirección que comprende que los intereses de burguesía y proletariado son irreconciliables en todo momento y lugar, que comprende que no luchar significa siempre perder y que comprende que, bajo el capitalismo, cualquier conquista será inestable porque el problema es el propio sistema. En definitiva, una dirección marxista que comprende que los problemas de nuestra clase sólo podrán solucionarse de forma permanente si eliminamos el capitalismo y que, por tanto, la lucha diaria en los centros de trabajo forma parte de otra más amplia: la lucha por la transformación socialista de la sociedad.

4.7 SOCIALISMO O BARBARIE

El marxismo tiene el mérito de haber aportado al conocimiento humano un método científico de análisis para comprender la historia y, muy particularmente, de haber elevado a un nivel consciente la lucha de la clase obrera contra la explotación capitalista.

Sin embargo, Marx explicó que la existencia del capitalismo, a pesar de todos sus crímenes y horrores, era una etapa necesaria e inevitable del largo y espinoso camino hacia la sociedad sin clases porque sólo con un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de la cultura podría erigirse una nueva sociedad digna de ser llamada humana.

Pero ahora, al igual que ocurrió con el esclavismo y el feudalismo, el capitalismo se ha vuelto un sistema agotado, caduco y obsoleto que amenaza con arrastrar a la humanidad a la barbarie. Es preciso sustituirlo por un sistema social superior: el socialismo.

El control asfixiante que ejercen a nivel mundial un puñado de grandes monopolios, multinacionales y bancos para mantener los beneficios y privilegios de unos cuantos grandes capitalistas se ha convertido en una pesadilla para miles de millones de seres humanos del planeta y en una amenaza para el medio ambiente y la vida sobre la Tierra.

Los últimos veinte años se han caracterizado no sólo por la polarización de la riqueza entre los países desarrollados y los subdesarrollados (Norte y Sur), sino también por la enorme brecha abierta entre ricos y pobres dentro de cada país. La pobreza ya no es exclusiva del mundo subdesarrollado: en Europa hay 57 millones de pobres y en EEUU, 38. Mientras, 225 multimillonarios tienen un patrimonio equivalente a los ingresos de 2.500 millones de seres humanos. Las guerras, las enfermedades que asuelan países enteros, el hambre y los desastres ecológicos no sólo no disminuyen, sino que aumentan.

La aparición del paro masivo está minando las reservas sociales acumuladas tras la Segunda Guerra Mundial y, con ellas, la estabilidad de los países capitalistas. Según cifras oficiales de la ONU, el paro mundial afecta a 120 millones de personas, pero estimaciones independientes sitúan el paro real en cerca de mil millones. Este paro no es cíclico ni se puede definir como el ejército de reserva que es absorbido en tiempos de recuperación económica. Se trata de paro estructural, que permanece en las épocas de *boom* y aumenta en las recesiones económicas. Actualmente, en un período de recuperación económica, el retroceso de las condiciones laborales de la clase obrera mundial se puede comparar a una auténtica contrarrevolución.

El capitalismo está condenado por la historia. Y al igual que la burguesía en su juventud derribó el feudalismo, corresponde ahora a la clase obrera acabar con este sistema, la única clase social oprimida que puede acometer esta tarea.

Las capas medias, por su heterogeneidad, modo de vida y papel individual en la producción, son orgánicamente incapaces de comprender la auténtica naturaleza del capitalismo. Debido a su posición en la sociedad y a su trabajo aislado, no se enfrentan a un enemigo de clase directo. Todos sus males les parecen producto de la incapacidad o la mala voluntad de los gobernantes, o de la *cólera divina*. Además, aunque sufren también los abusos de la banca y las grandes empresas, su aspiración no es acabar con el sistema, sino medrar dentro de él.

Las condiciones del proceso productivo, en cambio, crean en los trabajadores una mentalidad colectivista. Para que la empresa funcione, hace falta la cooperación de todos ellos. Cada uno es un eslabón del proceso, pero individualmente no representa nada. Además, los trabajadores ven la fuente de sus males en su patrón, que es el que les baja el salario, el que les explota y el que les despide. Comprenden que para defenderse necesitan de la máxima unión entre ellos. Y la experiencia de la lucha refuerza todavía más la mentalidad colectivista, al demostrarles el valor de la solidaridad, que la fuerza combinada de todos los trabajadores luchando por los intereses comunes obtiene mejores resultados que la acción individual de cada uno de ellos y los combates aislados. También en la lucha de clases se confirma esa ley de la dialéctica que dice que “el todo es mayor que la suma de las partes”.

Cuando la lucha de los trabajadores contra su empresario llega a su punto más agudo, se producen ocupaciones de empresas o se retiene a los directivos. En esos momentos, el sentimiento de que la em-

presa debe ser propiedad común de los trabajadores y la idea de expropiar al patrón nacen como un desarrollo natural de su conciencia, nacen de su propia condición obrera. La empresa no se puede repartir entre los trabajadores; para que siga funcionando deben seguir trabajando todos en común. Por eso el socialismo es la ideología natural de la clase obrera.

Las propias condiciones de vida creadas por el capitalismo sientan las bases para la futura sociedad socialista. Mientras que en la vieja economía agraria cada familia tenía su casa, su pozo, sus propios medios de alimentarse y vestirse, sus condiciones de vida particulares, hoy las familias obreras viven en común (barrios y edificios comunes), con sistemas comunes de electricidad, alcantarillado, telefonía, transporte público y adquisición de medios de consumo. Todo esto refuerza objetivamente la mentalidad colectivista y socialista de nuestra clase.

El capitalismo es un sistema mundial. La división del trabajo establecida por la economía capitalista a lo largo y ancho del planeta liga indisolublemente los países y los continentes unos con otros. Ningún país, ni siquiera los más poderosos y desarrollados, puede escapar al dominio aplastante del mercado mundial. Los estados nacionales y la propiedad privada de los medios de producción se han convertido en frenos formidables al desarrollo de las fuerzas productivas y el progreso de la humanidad. Ambos factores —la propiedad privada de los medios de producción y el estado nacional— son la causa de las crisis económicas, las guerras y los odios nacionales entre los pueblos. Su eliminación es la condición básica para comenzar a solucionar los problemas y calamidades que padece la humanidad.

La clase obrera es una clase mundial porque comparte en todo el mundo la misma explotación, los mismos problemas y los mismos intereses. El internacionalismo proletario —es decir, la organización a nivel internacional de la lucha de los trabajadores— no es una consigna o un sentimiento moral elevado, sino la base imprescindible para unificar la lucha de la clase obrera para transformar la sociedad en todo el planeta, pues el socialismo sólo podrá construirse como un sistema mundial. Además, actualmente el internacionalismo también es una necesidad práctica para que los trabajadores de las empresas multinacionales puedan defender adecuadamente sus intereses inmediatos.

Una revolución socialista triunfante en un solo país tendría efectos electrizantes en la conciencia y en las perspectivas de los trabajadores de todo el mundo, particularmente si se tratara de un país importante; sería la antesala de la revolución socialista mundial.

La gran contribución del marxismo a la causa obrera no es haber inventado una panacea social para acabar con las injusticias del mundo, sino haber hecho consciente a los trabajadores de los objetivos históricos que se derivan de la lucha de clases, la cual sólo desaparecerá con la supresión total de las relaciones de producción capitalistas y su sustitución por unas nuevas relaciones de producción en el marco de una sociedad socialista.

Es verdad que en las épocas “normales” del capitalismo las ideas marxistas no están presentes en la conciencia de las masas y que pueden pasar décadas sin que éstas cuestionen el orden social existente, lo que permite a los dirigentes reformistas y a la burguesía mantener su influencia. Pero la historia también demuestra que hay momentos en que el capitalismo entra en crisis, en que la rutina y la inercia se rompen bajo el peso de las contradicciones económicas, políticas y sociales del sistema, y la mayoría de la gente comienza a abandonar las viejas creencias y prejuicios de toda la vida, y busca organizarse para cambiar la sociedad.

En esos momentos históricos, el movimiento sindical puede ser una fuerza formidable en la lucha por la transformación de la sociedad, a condición de que se oriente conscientemente en la dirección adecuada. Es cierto que, en las épocas de paz social, la cúspide de los sindicatos se convierte en un punto de apoyo para la burguesía. Pero como organizaciones de ma-

sas de la clase obrera, los sindicatos se ven afectados por la radicalización política de los trabajadores. Cientos de veces en la historia hemos visto que los sindicatos han proporcionado los cuadros, los líderes y, en muchos casos, los destacamentos de choque de la revolución: en la Revolución de Octubre, en la Revolución Española (1931-39), en la Transición...

Para que esos momentos históricos de cuestionamiento del capitalismo culminen en una revolución, hace falta un partido marxista de masas que ofrezca a la clase obrera una alternativa al *impasse* del capitalismo, un programa de transformación social completa.

El capitalismo creó unas fuerzas productivas capaces de satisfacer todas las necesidades básicas del planeta. Para que se usen en interés de toda la humanidad, y no de un puñado de privilegiados, como ha ocurrido hasta ahora, la propiedad privada tiene que desaparecer, hay que expropiar la banca, los monopolios y los latifundios, para dar paso a la planificación democrática de la economía bajo control obrero. Sólo así las lacras del capitalismo se convertirán en malos recuerdos del pasado, sólo así podrá el género humano avanzar hacia su auténtica liberación, preservando las conquistas que ha atesorado durante toda su historia en el terreno de la tecnología, la ciencia, el pensamiento y la cultura, para elevarlas hasta el infinito.

Los sindicalistas marxistas agrupados en EL MILITANTE tenemos plena confianza en la capacidad de lucha de la clase obrera. Como demuestra la historia, no hay fuerza en este mundo capaz de anular el deseo de los trabajadores de tener una vida mejor. Por graves que hayan sido las derrotas, una y otra vez hemos visto que los trabajadores vuelven a levantarse y reinician el combate por sus derechos. Esta larga marcha por la dignidad de nuestra clase tiene que tener un horizonte, que no puede ser otro que el socialismo. La lucha sindical sólo cobra todo su sentido si

es una herramienta al servicio de la emancipación de la clase obrera, al servicio de la elevación de la conciencia de los trabajadores, de su organización y de su capacidad de lucha. Por eso la tarea fundamental de los sindicalistas revolucionarios es construir entre la clase obrera una corriente marxista de masas para acabar con el capitalismo

en todo el mundo y establecer un nuevo orden económico y social en beneficio de toda la humanidad: el socialismo.



5. Un programa de clase

Los sindicalistas marxistas defendemos en el seno de los sindicatos de clase un programa de lucha frente a la ofensiva de los capitalistas.

Plena democracia interna basada en la democracia directa de las asambleas y las secciones sindicales. ¡Todas las decisiones deben ser sometidas a la opinión de los afiliados y los trabajadores!

Por un giro sindical a la izquierda. Por una acción sindical de clase y combativa basada en la movilización y en la unificación de las luchas. No a los pactos sociales con la patronal y el gobierno.

Por la defensa de todos los puestos de trabajo y los derechos conquistados. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no las familias obreras!

5.1 EN DEFENSA DEL EMPLEO ESTABLE Y DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

- ⇒ Reducción de la jornada laboral a **35 horas** sin reducción salarial ni intensificación de los ritmos.
- ⇒ **Jubilación** a los 60 años (en oficios peligrosos a los 55 años) con el 100% del salario y con contratos de relevo que sean estables.
- ⇒ **Salario Mínimo** Interprofesional de 700 euros al mes a partir de los 16 años. Por el reconocimiento de la escala móvil de precios / salarios en el Estatuto de los Trabajadores. Supresión del IPREM.
- ⇒ **Subsidio de desempleo** indefinido equivalente al SMI hasta encontrar un puesto de trabajo.
- ⇒ **Transporte** gratuito para los parados.
- ⇒ **No a las contrarreformas** laborales. Ningún abaratamiento del despido.
- ⇒ Prohibición de las **ETTs**. Que el Inem sea el único que gestione los contratos. Control de éste por los trabajadores y los sindicatos de clase.
- ⇒ Defensa de la **empresa pública**. No a las privatizaciones. Mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo. Renacionalización de las empresas privatizadas.
- ⇒ **No al cierre** de fábricas. Si los patronos alegan pérdidas, que abran los libros de cuentas para ver adónde fue a parar la riqueza creada por los trabajadores. Nacionalización de las empresas y sectores en crisis bajo control obrero, con indemnización sólo en caso de necesidad comprobada.
- ⇒ **Reindustrialización** desde el sector público de las comarcas en crisis.

- ⇒ A **igual trabajo, igual salario**. No a la discriminación de las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes.
- ⇒ Ninguna restricción de los **derechos sindicales de la juventud** desde que empiezan a trabajar. Reforma del artículo 69 del Estatuto de los Trabajadores que impide a los menores de 18 años ser candidatos en las elecciones sindicales.
- ⇒ Ninguna restricción en los **derechos de expresión, reunión y huelga**. No a los laudos para dirimir conflictos laborales.

5.2 PAREMOS LA MATANZA DE TRABAJADORES POR FALTA DE SEGURIDAD

- ✓ **Contratos fijos** tras el período de prueba. Contratos fijos-discontinuos para los empleos estacionales. Cumplimiento estricto de las normas de prevención de riesgos laborales.
- ✓ Capacidad de los **delegados de prevención laboral** para parar la producción en caso de incumplimiento de la ley. Enjuiciamiento criminal de todos los empresarios que incumplan las normas de seguridad.

5.3 NO A LA PRECARIEDAD Y A LA SUBCONTRATACIÓN

- ⇒ Por la **estabilidad del empleo**: conversión de temporales en fijos y creación de bolsas de trabajo.
- ⇒ Derecho a la **subrogación** de los trabajadores en los casos de cambio de contrata.
- ⇒ **Acuerdos-marco** que unifiquen los aspectos más importantes para el conjunto de las compañías subcontratadas por una empresa.
- ⇒ **Equiparación** salarial y de jornada con la empresa principal o la Administración pública.
- ⇒ **Prohibición** de la subcontratación en cadena.
- ⇒ **Integración en plantilla** de los trabajadores subcontratados que trabajan de forma permanente en el recinto de las empresas principales o en servicios públicos externalizados.

5.4 ALTERNATIVA PARA EL MOVIMIENTO JORNALERO

- ✓ Elevación de las **bases de cotización** de los trabajadores agrarios hasta alcanzar una pensión media superior a los 800 euros, cotización que será financiada para todas las contingencias (invalidez, desempleo, formación, etc.) por las cuotas patronales.

- ✓ Derecho a la **jubilación anticipada**.
- ✓ **Acceso a las prestaciones** por invalidez, accidente, enfermedad, etc. en las condiciones del régimen general, lo que supondría duplicar las cuantías y suprimir el requisito de la firma del patrón.
- ✓ Derecho a una **prestación contributiva** por desempleo con la misma duración y cuantía que el resto de los trabajadores. En caso de tener los requisitos para solicitarla, el trabajador eventual podrá elegir entre la misma o seguir percibiendo el subsidio agrícola.
- ✓ Derecho a la **ayuda familiar** al agotarse el desempleo.
- ✓ Derecho a acogerse al **subsidio especial para mayores** de 52 años que se establece en el régimen general. Junto a éste, se mantendría el subsidio especial agrario para mayores de 52 años tal y como viene recogido en la presente legislación.

5.5 POR UNAS CONDICIONES DE VIDA DIGNAS

- ⇒ Defensa de la **sanidad y la educación públicas**. No a la privatización y externalización de servicios.
- ⇒ **Vivienda digna**. Limitación legal del alquiler mensual al 10% de los ingresos familiares. Municipalización del suelo urbano y expropiación de todos los solares privados dedicados a la especulación, sin indemnización salvo en casos de necesidad comprobada. Control de las normas de edificación por comités compuestos por un tercio de representantes de los trabajadores de la construcción y asociaciones de vecinos, un ter-

cio por los sindicatos de clase y un tercio por los ayuntamientos.

- ⇒ Edificación de **un millón de viviendas sociales** en los próximos cuatro años. Control obrero y sindical de los planes de obras, con facultades ejecutivas para el control y seguimiento de la planificación en cada tajo.
- ⇒ **Escuelas infantiles públicas** y gratuitas en todos los barrios. Baja por paternidad o maternidad de seis meses con el 100% del salario.
- ⇒ **Equipamientos sociales**, culturales y deportivos públicos para disfrute de la población.
- ⇒ Por unos servicios sociales en beneficio de la **mujer trabajadora**: guarderías, lavanderías, comedores, etc., públicos y gratuitos para acabar con la esclavitud de las tareas domésticas.
- ⇒ Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los **inmigrantes**. Restablecimiento de la ley de asilo político. Fin de los centros de internamiento y de las expulsiones del país por carecer de papeles. Derecho al reagrupamiento familiar. Medios materiales suficientes para que las diferentes comunidades puedan mantener sus tradiciones culturales y lingüísticas.

5.6 POR UNA ECONOMÍA SOCIALISTA AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES SOCIALES

- ✓ **Nacionalización** sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, de la banca, la tierra y las grandes empresas, para así implantar el control obrero y poder planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.



Textos marxistas sobre el movimiento obrero

Carlos Marx y Federico Engels

- *Las huelgas y las coaliciones de los obreros* (apartado V del capítulo II de *Miseria de la filosofía*).
- *El manifiesto comunista* (publicado por la Fundación Federico Engels en castellano y catalán).
- *La situación de la clase obrera en Inglaterra*.
- Artículos de Engels en *The Labour Standard*.

V. I. Lenin

- *Proyecto de programa del partido socialdemócrata y explicación del mismo* (1895-96).
- *Sobre las huelgas* (1899).
- *Una nueva masacre* (1901).
- *La espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia, Política tradeunionista y política socialdemócrata y El primitivismo en el trabajo de los economistas y la organización de los revolucionario* (capítulos II, III y IV de *¿Qué hacer?*).
- *Nuevos acontecimientos y viejos problemas* (1902).
- *La era de las reformas* (1903).
- *¿Por qué elogian los realistas liberales burgueses a los ‘realistas’ socialdemócratas?* (capítulo I del epílogo a *Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática*).
- *El congreso de Jena del partido obrero socialdemócrata de Alemania* (1905).
- Carta a S. I. Gusev (13/10/1905).
- *El partido socialista y el revolucionarismo sin partido* (1905).
- Prólogo al folleto de Lunacharsky sobre la actitud del partido ante los sindicatos (1907).
- *La neutralidad de los sindicatos* (1908).
- *Sobre el carácter y las formas orgánicas de la labor del partido*, resolución de la conferencia de Praga del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia (1912).

- *La vida enseña* (1913).
- *La clase obrera y la cuestión nacional* (1913).
- *La celebración del Primero de Mayo por el proletariado revolucionario* (1913).
- *Las tareas de la agitación en el momento presente*, de las resoluciones de la reunión del comité central del POSDR con un grupo de militantes responsables del partido (verano 1913).
- *Lo que no se debe imitar del movimiento obrero alemán* (1914).
- *¿Deben actuar los revolucionarios en los sindicatos reaccionarios?* (capítulo VI de *La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo*, publicado por la FFE).
- *Acerca de la necesidad de fundar el sindicato de obreros agrícolas de Rusia* (1917).
- *Sobre las tareas de los sindicatos* (1918).
- Informe en el II Congreso de sindicatos de toda Rusia (1920).
- *Acerca del papel y de las tareas de los sindicatos en las condiciones de la NEP* (1922).

Rosa Luxemburgo

- *Huelga de masas, partido y sindicato* (publicado por la FFE).
- *Reforma o revolución* (publicado por la FFE).

León Trotsky

- *Acerca de los sindicatos* (publicado por la FFE).
- *El programa de transición*.

Varios

- Resoluciones sindicales del II, III y IV Congresos de la Internacional Comunista.

OTROS DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL MILITANTE

